Mitigar la violencia en los centros de narcotráfico en América Latina

Informe sobre América Latina N°108 | 11 de marzo de 2025

Traducido del inglés

30

1995 · 2025

PREVENTING WAR. SHAPING PEACE.

Headquarters
International Crisis Group
Avenue Louise 235 • 1050 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 502 90 38 • brussels@crisisgroup.org

Tabla de contenidos

Resumen ejecutivo i

I. Introducción 1

II. Cambios históricos en el narcotráfico en América Latina 5
- A. Nuevas y viejas drogas 5
- B. La bonanza del narcotráfico 6
- C. La "guerra contra las drogas" y sus consecuencias 7
- D. El auge del fentanilo 8

III. Redes criminales 11
- A. Financiación y gestión 11
- B. Tráfico internacional 14
- C. Producción y tráfico a nivel nacional 18
- D. Control y distribución urbana 20

IV. Violencia 23
- A. Plata o plomo 24
- B. Control territorial 26
- C. Reclutamiento 29
- D. Extorsión 30
- E. Prisiones 32

V. Medidas clave para combatir la violencia 34
- A. Seguridad y justicia 35
  1. Modernización institucional 35
  2. Un modelo diferente de intervención policial 35
  3. Considerar los efectos de las estrategias de seguridad 37
  4. Prevenir la colusión 38
  5. Reforma penitenciaria 39
- B. Medios de subsistencia alternativos 39
- C. Reducir el flujo de armas 40
- D. Dialogar con los criminales 42
  1. Diálogos comunitarios 42
  2. Negociaciones con el Estado 43
- E. Control de drogas 44

VI. Conclusiones 46

ANEXOS

A. Mapa de México, América Central y los Andes 47

B. Acerca de International Crisis Group 48

C. Informes e informes breves de Crisis Group sobre América Latina desde 2022 49

D. Consejo directivo de Crisis Group 50

Conclusiones principales

¿Qué hay de nuevo? La violencia derivada del narcotráfico azota a América Latina, a pesar de décadas de campañas de seguridad basadas en acciones policiales y militares. El número de grupos criminales ha crecido, se han extendido a países que antes no se veían afectados y han diversificado sus actividades. La competencia entre estos grupos por las ganancias del narcotráfico es la principal causa de violencia dentro de las comunidades.

¿Por qué importa? EE. UU. nuevamente está exigiendo ofensivas militares contra los grupos criminales de la región, pero la evidencia muestra que intervenciones similares en el pasado han servido para reconfigurar las rutas de suministro, estimular redes delictivas más complejas, acelerar los esfuerzos para corromper a los funcionarios estatales y generar picos de violencia que perjudican a los más vulnerables.

¿Qué se debe hacer? América Latina debe aprender de sus éxitos y fracasos. Policías más efectivas, alternativas económicas a la delincuencia, restricciones al flujo de armas y, en determinadas condiciones, negociaciones con grupos ilegales son parte de la solución. Los Estados extranjeros deben reconocer que es contraproducente exigir controles más estrictos cuando éstos empeoran la violencia.

Resumen ejecutivo

Más de medio siglo después de la declaración de la "guerra contra las drogas", América Latina lucha por controlar el estallido de violencia que viene de la mano con el narcotráfico. Aunque el crimen organizado relacionado con las drogas ha tenido picos de violencia notorios en el pasado, sobre todo en Colombia y México, nunca se había extendido tanto y rara vez había penetrado tan profundamente tanto Estados como comunidades. Los grupos criminales se han dividido, multiplicado y diversificado, sumando sustancias sintéticas letales como el fentanilo a la oferta tradicional de drogas orgánicas tales como la marihuana, la cocaína y la heroína, y se han involucrado en nuevos negocios ilegales, incluyendo la extorsión. Donde encuentran comunidades pobres y desprotegidas, los grupos criminales actúan como empleadores y señores feudales; donde hay presencia de funcionarios estatales, los coaccionan y corrompen. Ahora que Washington presiona para que se tomen nuevas medidas militares contra los traficantes de droga, quizás incluso con la participación de fuerzas estadounidenses, los líderes latinoamericanos se enfrentan a decisiones difíciles. A pesar de estas presiones, la experiencia sugiere que una combinación de mejor acción policial, creación de formas alternativas de subsistencia, control de armas y, en condiciones específicas, negociaciones, sería más eficaz para reducir la violencia.

El mapa del narcotráfico en América Latina se ha transformado en las décadas transcurridas desde que surgieron las primeras rutas de suministro desde los Andes hacia EE. UU. La demanda de narcóticos fuera de la región sigue en niveles récord, con nuevos mercados en auge, en particular la cocaína en Europa y el fentanilo en EE. UU. Al mismo tiempo, recurrentes oleadas de operaciones de seguridad respaldadas por EE. UU., en forma de capturas y extradiciones de jefes criminales (conocidos como capos), incautaciones de drogas y erradicación forzosa, han revolucionado la cadena de suministro. Aunque Colombia y México siguen siendo el corazón del negocio de las drogas, una de las principales rutas para llegar a EE. UU. y, en particular, a Europa se extiende por el Pacífico, abarcando países que en gran medida no habían sido afectados por el tráfico ilícito, como Costa Rica y Ecuador. En cada uno de ellos se han registrado fuertes aumentos de las tasas de violencia; Ecuador fue en 2024 la nación más violenta de Suramérica. En toda la región, las oleadas de muerte han marcado los nuevos centros de un narcotráfico hiperviolento y en rápida evolución.

Comprender cómo se produjo esta oleada de delincuencia es fundamental para detenerla. El narcotráfico se ha adaptado a las amenazas de las operaciones de seguridad, volviéndose más flexible y resistente. En lugar de organizaciones jerárquicas que podían desmantelarse una vez identificados sus líderes, el narcotráfico funciona cada vez más a través de redes de proveedores que subcontratan cada etapa de la ruta a otros operadores más pequeños. Financistas de alto nivel contratan a sofisticados traficantes internacionales, que supervisan las exportaciones de droga a los mercados consumidores, los que, a su vez, se asocian con grupos criminales nacionales y locales para satisfacer los pedidos. Los grupos nacionales manejan la producción o garantizan el paso seguro de la droga por un corredor determinado de tráfico. A nivel local, las bandas urbanas son contratadas por aliados criminales más grandes para que pres-

ten servicios logísticos de pequeña escala, como el contrabando de drogas a través de puertos.

Todas las capas de estas redes han aprendido que la cooptación de funcionarios estatales es un activo comercial fundamental. A través de una combinación de amenazas y sobornos, sus objetivos son las fuerzas de seguridad, jueces, fiscales y políticos que puedan garantizar el buen funcionamiento de sus negocios, reduciendo el riesgo de arrestos o incautaciones. De la misma manera, las cárceles de algunos de los lugares más peligrosos de América Latina están controladas por reclusos que dirigen sus empresas criminales tras las rejas y ejecutan salvajes venganzas contra rivales dentro y fuera de ellas.

Si las ganancias de este negocio tienden a fluir hacia arriba, la violencia se encona en la base. La sabiduría convencional sobre los mercados ilícitos sugeriría que el conflicto es un signo de inestabilidad y desorden. Pero la violencia parece ser una característica estable (y de hecho un producto) de la forma en que opera el narcotráfico en América Latina. En los niveles más altos del negocio de las drogas hay pocos actores, que hacen todo lo posible por ocultar sus conexiones con el negocio. A nivel local, donde pequeños grupos y bandas compiten por el control, la competencia para ganarse la confianza de aliados criminales más grandes y entrar en la cadena de suministro de drogas suele ser feroz. A las bandas a menudo se les paga con drogas y armas, que luego utilizan para extraer más ingresos de las aterrorizadas comunidades, incluso mediante la venta de drogas a pequeña escala, la extorsión y el secuestro. A medida que los grupos rivales intentan defender su territorio, surgen fronteras urbanas invisibles entre ellos: los civiles que se atreven a cruzarlas en algunas de las comunidades más afectadas de la región, como Durán en Ecuador o Buenaventura en Colombia, enfrentan violentas represalias.

Aun así, el crimen organizado tiene influencia sobre las comunidades pobres más allá de la intimidación. En muchas comunidades pobres, los hogares agotaron sus ahorros para sobrevivir meses de confinamiento por la pandemia de COVID-19, mientras que recortes en los subsidios antes financiados con el auge de las materias primas dejaron un profundo vacío económico. El crimen organizado ofrece una alternativa a jóvenes desesperados, que se unen con la esperanza de obtener ingresos, estatus y poder en sus comunidades. La admiración de los delincuentes locales se ha vuelto algo común entre los adolescentes de una infinidad de comunidades empobrecidas.

No existe una única cura para el desbordante ecosistema criminal latinoamericano, aunque las experiencias del pasado son prueba de lo que no ha funcionado. La represión militar y las capturas de alto nivel generan victorias a corto plazo, pero una y otra vez alimentan nuevas olas de violencia y provocan reconfiguraciones del narcotráfico que lo hacen más resistente a las operaciones de seguridad. Los Estados latinoamericanos, que durante mucho tiempo han seguido el ejemplo de Washington en la "guerra contra las drogas", tendrán que repensar las herramientas convencionales para limitar la oferta de drogas teniendo en cuenta qué enfoques reducen (en lugar de exacerbar) los daños a la población civil. La política adecuada probablemente sea una combinación de iniciativas, entre ellas, fortalecer las investigaciones, limitar la corrupción en las fuerzas de seguridad, mejorar las policías comunitarias y realizar una reforma penitenciaria. Los Estados también deben tratar de resolver las graves dificultades sociales de las que se aprovechan los grupos delictivos para reclutar a

sus integrantes. En casos específicos, los gobiernos podrían considerar la posibilidad de entablar conversaciones con los grupos criminales para frenar los peores brotes de violencia y desvincular a los jóvenes que quieran un nuevo comienzo.

Dado el papel de América Latina en el narcotráfico, sus arraigadas desigualdades y debilidades institucionales, la región probablemente seguirá sufriendo las consecuencias de una actividad delictiva que alimenta la elevada demanda mundial de drogas. La región sufre una cruel ironía, en la que más acciones de fuerza, más incautaciones y una prohibición más estricta tienden a elevar el precio de las drogas y, por lo tanto, las ganancias de los traficantes. La región necesita estrategias para reducir la violencia y socios internacionales que se comprometan no sólo a impedir que las drogas lleguen al mercado, sino también a mitigar sus consecuencias. Aunque todos coinciden en que el crimen organizado es un flagelo que debe ser combatido, el costo de la lucha contra las drogas no debe seguir pagándose con vidas civiles.

Bogotá/Ciudad de México/Nueva York/Bruselas,
11 de marzo de 2025

International Crisis Group
Informe sobre América Latina N°108 **11 de marzo de 2025**

Mitigar la violencia en los centros de narcotráfico en América Latina

I. Introducción

Durante el último medio siglo, la producción, el tráfico, la venta y el consumo de drogas ilícitas han sumido a América Latina en una profunda violencia. Ya sean ataques terroristas en Colombia en la década de 1990, asesinatos selectivos durante las recientes campañas electorales mexicanas, reclutamiento de menores o violencia sexual, el narcotráfico ha amenazado la vida de millones de personas y ha trastornado a Estados y comunidades. Aunque la intensidad fluctúa, el daño causado por estos negocios ilícitos es una constante, y los latinoamericanos afirman con frecuencia que la violencia criminal es su principal preocupación, por encima de la pobreza, la desigualdad o la insuficiencia de servicios públicos[1]. Hoy en día, las drogas están lejos de ser la única fuente de ingresos de las organizaciones criminales. No obstante, la producción y el tráfico de estupefacientes siguen siendo el pilar del negocio ilegal y fuente del capital inicial que permite que el crimen organizado se extienda, se diversifique y prospere.

Desde su aparición en la década de 1970, las organizaciones ilegales latinoamericanas se han expandido a nuevos países y han invadido mercados emergentes, algunos de ellos lícitos. Conversaciones con fuerzas de seguridad, integrantes antiguos y actuales de grupos armados, miembros de la población civil y funcionarios del Estado dejan en claro que detrás de este crecimiento hay una serie de cambios de gran alcance en la forma y estructura de estos grupos. Las redes criminales transnacionales involucradas en la cadena de suministro de drogas ahora están organizadas en varios niveles, con fluidas alianzas de conveniencia entre ellas. Estos niveles, en los que participan diversos grupos que a menudo compiten entre sí, han surgido como parte de un proceso de mutación tras el desmantelamiento de las grandes organizaciones de narcotraficantes y la eliminación de muchos de sus líderes. Los grupos criminales en toda América Latina han tendido a fragmentarse después de la captura o el asesinato de sus jefes. Aunque los grandes carteles hegemónicos aún controlan gran parte del mercado mexicano, el tráfico de drogas en otras partes está principalmente en manos de organizaciones más pequeñas y ágiles que se especializan en determinadas partes del proceso de producción, tráfico y venta minorista.

En un momento en el que los grupos criminales se disputan el control de territorios, negocios lícitos e ilícitos y, sobre todo, lucrativas rutas del narcotráfico, los índices de violencia letal han descendido en algunos países, mientras que se mantienen obstinadamente altos en otros y se disparan en lugares antes pacíficos. Las ofensivas de las fuerzas de seguridad en determinada parte de la cadena de suministro han

[1] Jaramillo, Carlos Felipe "La violencia y el crimen organizado, los grandes obstáculos del desarrollo en Latinoamérica", *El País,* 23 de enero de 2024; e "Informe Regional de Desarrollo Humano, Atrapados: Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe", Programa de la ONU para el Desarrollo, 22 de junio de 2021, capítulo 4.

empujado a los criminales y la violencia hacia otras, en un juego del gato y el ratón de rutas y relaciones comerciales cambiantes. A medida que los mercados se reconfiguran, las comunidades pobres o alejadas de los centros de poder político se encuentran constantemente expuestas a mayores daños. A menudo, la carga de exigir una respuesta adecuada de las autoridades recae sobre las víctimas, como los familiares de los desaparecidos en México o los encarcelados en Ecuador.

Sin embargo, en lugar de centrarse en reducir la violencia, los gobiernos latinoamericanos han tendido a concentrarse en la lucha contra la oferta de drogas, en cumplimiento de los tratados internacionales que han penalizado los estupefacientes desde la década de 1960 y a menudo bajo presión del exterior, en particular desde Washington[2]. La presión para hacerlo ha aumentado drásticamente desde el regreso a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, quien utiliza las amenazas y la imposición de aranceles para presionar a México y Canadá para que detengan los envíos de fentanilo y ha sugerido que EE.UU. podría hacer una intervención militar directa para luchar contra los grupos de narcotraficantes[3]. Trump incluyó recientemente a varias organizaciones del narcotráfico en la lista de organizaciones terroristas extranjeras[4]. Aunque dichas designaciones no autorizan automáticamente a Washington a ejecutar ataques militares, en el pasado han marcado el camino hacia un eventual uso de la fuerza[5]. En un mensaje en redes sociales, Elon Musk, jefe del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, dijo inmediatamente que los grupos son "elegibles para ataques con drones", sumándose al mensaje de sectores republicanos que han abogado por una intervención de fuerza directa[6].

Es probable que el regreso de Trump también empodere a los Estados y ciudadanos latinoamericanos que han respaldado políticas de mano dura para combatir el crimen, las cuales suelen incluir arrestos masivos, patrullajes policiales y militares,

[2] El régimen prohibicionista se consolidó en una sesión especialmente convocada de la Asamblea General de la ONU en 1998, que prometió un "mundo libre de drogas" en diez años. "A century of International Drug Control", Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), junio de 2009. La mayoría de los países latinoamericanos se adhirieron voluntariamente a este régimen.

[3] "Fact Sheet: President Donald J. Trump Imposes Tariffs on Imports from Canada, Mexico and China", comunicado de prensa, Casa Blanca, 1 de febrero de 2025. Fue el expresidente estadounidense Richard Nixon quien acuñó el término "guerra contra las drogas". Benjamin T. Smith, "New documents reveal the bloody origins of America's long war on drugs", *Time*, 24 de agosto de 2021.

[4] El 19 de febrero, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, designó a seis grupos criminales mexicanos, así como al Tren de Aragua (originario de Venezuela) y a la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13) como Organizaciones Terroristas Extranjeras, cumpliendo con una orden ejecutiva que Trump firmó el 20 de enero, día de su toma de posesión. Los grupos mexicanos son los poderosos Carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y cuatro grupos regionales más pequeños, Carteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana, el Cartel del Noreste y el Cartel del Golfo. "Designating Cartels and other Organizations as Foreign Terrorist Organizations and Specially Ddesignated Global Terrorists", orden ejecutiva, Casa Blanca, 20 de enero de 2025. "Public Notice 12671, 90 FR 10030", Departamento de Estado de EE. UU., 20 de febrero de 2025.

[5] Para más información sobre las implicaciones de la designación, ver Brian Finucane, "U.S. Military Action in Mexico: Almost Certainly Illegal, Definitively Counterproductive", *Just Security*, 20 de febrero de 2025.

[6] Tweet de Elon Musk, @elonmusk, asesor senior del presidente de EE. UU., 2:00 pm, 19 de febrero de 2025.

la declaración de estados de emergencia y, en casos extremos, el respaldo tácito a ejecuciones extrajudiciales[7].

Sin embargo, a largo plazo, ni los intentos por reducir la oferta de drogas ni los de acabar con los grupos delictivos han producido muchos éxitos duraderos[8]. La producción de drogas en América Latina ha seguido expandiéndose, alimentando el dinamismo y el crecimiento de los consumidores en la región y fuera de ella. El cultivo de coca en Colombia se cuadriplicó en la última década, mientras que la producción mundial de cocaína se duplicó[9]. El consumo de drogas también ha crecido de forma constante; la ONU señaló en el año 2024 que 292 millones de personas en todo el mundo afirman haber consumido narcóticos durante el último año[10]. Aunque la mayoría de los consumidores prefieren el cannabis, el abuso de drogas mucho más dañinas sigue siendo sumamente perjudicial: la epidemia de opioides sintéticos ha matado a más de 600 000 personas sólo en EE. UU. y Canadá[11]. Mientras tanto, el tráfico de drogas sigue siendo muy rentable para las organizaciones criminales violentas. En los últimos años, los reclamos latinoamericanos por un cambio de rumbo en la política mundial de drogas se han vuelto fuertes e insistentes, pero hasta ahora han sido en vano[12].

En el contexto de una guerra contra las drogas que ha cobrado un nuevo impulso con el respaldo de EE. UU., este informe se centra en las amenazas criminales derivadas del tráfico ilícito de drogas que afectan a numerosas comunidades latinoamericanas en la actualidad. Examina los cambios en la cadena de suministro de drogas, las lógicas del uso de la violencia por parte de los grupos criminales y las razones por las que el derramamiento de sangre se concentra tan intensamente a lo largo de determinadas partes de la ruta del narcotráfico. Presenta una serie de recomendaciones que buscan frenar la inseguridad que afecta a los países latinoamericanos, al tiempo que reconoce que las múltiples raíces de este arraigado problema requieren un enfoque que abarque mucho más que nuevas iniciativas de seguridad y se extienda a la

[7] Erika María Rodríguez-Pinzón y Thiago Rodrigues, "Mano dura y democracia en América Latina: seguridad pública, violencia y estado de derecho", *América Latina Hoy*, vol. 84 (2020). Ver también informe de Crisis Group sobre América Latina N°25, *La droga en América Latina I: Perdiendo la lucha*, 14 de marzo de 2008; informe N°62, *El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en Centroamérica,* 6 de abril de 2017; e informe N°87, *Raíces profundas: coca, erradicación y violencia en Colombia*, 26 de febrero de 2021. La erradicación forzosa de cultivos de coca es otro ejemplo de estas políticas.

[8] Ignacio Cano, Emiliano Rojido y Doriam Borges, "¿Qué funciona para reducir homicidios en América Latina y el Caribe? Una revisión sistemática de las evaluaciones de impacto", Laboratório de Análise da Violência, Universidade do Estado do Río de Janeiro, Brasil, septiembre de 2024. Este análisis de investigaciones académicas concluyó que las intervenciones más prometedoras para reducir la violencia incluyen una mejor vigilancia policial, el control de armas y esfuerzos por disminuir el abuso de alcohol, así como sistemas de justicia con mayor capacidad de respuesta.

[9] "World Drug Report 2023", UNODC, junio de 2023.

[10] "World Drug Report 2024 – Special points of interest", UNODC, junio de 2024

[11] El consumo de cannabis es legal dentro de ciertos márgenes en 24 estados de EE. UU., tres países de la UE y países latinoamericanos como Chile, Uruguay, Argentina, Colombia y México. Sobre la epidemia de opiáceos, ver Tracie White, "Stanford-Lancet report calls for sweeping reforms to mitigate opioid crisis", *Stanford Medicine News Centre,* 2 de febrero de 2022

[12] Estos llamados han sido respaldados por varias organizaciones, ver "Hora de poner fin a la prohibición", Comisión Global sobre Políticas de Drogas, 2021.

generación de formas de subsistencia alternativos, el control de armas y, en ciertos casos, diálogos con grupos ilegales. Se centra en Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y México. No incluimos a Brasil, que merece un análisis independiente. Crisis Group realizó más de 200 entrevistas, aproximadamente un tercio de ellas a mujeres, con autoridades, fuerzas de seguridad, integrantes actuales y antiguos de grupos criminales y residentes en las comunidades afectadas.

II. Cambios históricos en el narcotráfico en América Latina

América Latina es una de las principales fuentes de drogas orgánicas y sintéticas. A lo largo de medio siglo, el narcotráfico ha evolucionado y mutado para eludir el alcance de las fuerzas de seguridad, extendiendo la amenaza de la violencia a comunidades y países de toda la región que antes no se veían afectados.

A. *Nuevas y viejas drogas*

Las primeras grandes organizaciones criminales se enriquecieron con el suministro de marihuana, cocaína y heroína. La marihuana en cierta medida, pero sobre todo la cocaína, siguen siendo importantes fuentes de ingresos para el crimen organizado. La mayor parte de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, aún se cultiva en Colombia, aunque también hay cultivos en Perú y Bolivia y, en mucha menor medida, en Guatemala, Honduras y el sur de México[13]. Sin embargo, la ubicación de la clientela ha cambiado. La demanda estadounidense de la droga es alta, pero se ha estancado, mientras que Europa es el mayor mercado en crecimiento, con un aumento del consumo del 60 por ciento en la década que concluyó en 2022[14]. Los traficantes también están abriendo nuevos mercados en Asia y Oceanía, donde los precios son más altos[15]. Mientras tanto, las drogas sintéticas han inundado el mercado estadounidense: primero la metanfetamina y ahora, de forma abrumadora, el fentanilo, del cual se cree que alrededor del 96 por ciento proviene de México[16]. La expansión de estos mercados ha fortalecido a los traficantes y ha planteado inmensos desafíos para las fuerzas de seguridad que intentan detenerlos.

Por su parte, el crecimiento del consumo de drogas en América Latina ha sido en gran medida ignorado por los responsables de las políticas, a pesar de que, según informes, se duplicó entre 1990 y 2010. Aunque no hay sondeos sobre el consumo regional de drogas ampliamente disponibles, en 2019 la Organización de los Estados Americanos (OEA) encontró que el consumo de cocaína había aumentado en cerca de la mitad de los países de América Latina, mientras que el consumo de metanfetamina en México, el principal productor de esta droga, se ha disparado en los últimos años[17].

[13] "World Drug Report 2024", op. cit.
[14] Ibid.
[15] El precio de la cocaína es 50 veces más alto en el mercado europeo que en Ecuador, y 300 veces más alto en Oceanía, "El ecosistema criminal en el Ecuador: líneas de acción", *Revista Pensamiento Estratégico – ADEMIC*, vol. 4, no. 1 (2024), p. 121.
[16] El fentanilo, un opioide sintético diez veces más potente que la morfina, es extremadamente compacto y a menudo se le hace pasar como un medicamento de venta lícita con receta médica. Una dosis de fentanilo puro del tamaño de unos pocos granos de sal podría ser letal. Ver "Facts about Fentanyl", Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA); "International Narcotics Control Strategy Reports", Departamento de Estado de EE. UU., 1 de marzo de 2024.
[17] Sin embargo, las tasas de consumo de drogas en América Latina siguen siendo bajas en comparación con el resto del mundo. Ver "Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2023", OCDE/Banco Mundial, 2023, p.128; "Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019", OEA, 2019. Entrevista de Crisis Group, funcionario médico, Servicio Médico Forense, Baja California, abril de 2024.

B. *La bonanza del narcotráfico*

Las primeras redes de narcotráfico que conectaron a Suramérica con EE. UU. surgieron en la década de 1970, cuando clanes familiares de la Sierra Nevada y La Guajira, ambas en la costa atlántica colombiana, comenzaron a transportar cannabis hacia el norte[18]. Pronto le siguió la cocaína, que se concentró en gran medida en manos de los carteles de Medellín y Cali. Estas organizaciones eran jerárquicas y construyeron cadenas de suministro integradas verticalmente que abarcaban desde los cultivadores de coca en Perú y Bolivia hasta el procesamiento en Colombia y distribuidores con sede en EE. UU. Durante las dos décadas de su supremacía, los carteles perfeccionaron modelos de influencia y captura del poder político y económico que persisten hasta el día de hoy. Usaron su inmenso capital financiero, junto con su capacidad de brutalidad, para comprar y amenazar su camino hacia la impunidad[19].

A mediados de la década de 1980, las fuerzas de seguridad estadounidenses intensificaron las operaciones contra el tráfico de cocaína a través del Caribe por aire y mar, lo que provocó un desplazamiento de las rutas hacia México. Allí, los grupos de contrabandistas existentes, que tenían una larga historia de tráfico de alcohol, marihuana y heroína comenzaron a exportar cocaína a través de la frontera estadounidense. Los grupos mexicanos, que comenzaron como socios menores en el negocio, pronto obtuvieron ganancias sin precedentes y su poder se expandió[20]. Por la misma época, una operación conjunta entre México y EE. UU. capturó al líder del entonces dominante Cartel de Guadalajara, una confederación de clanes de traficantes formada bajo el amparo del antiguo sistema unipartidista mexicano. El grupo se dividió en cuatro: el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, el Cartel de Tijuana y el Cartel de Juárez.

Desde esos primeros días, la violencia fue una característica del mercado del narcotráfico, pero se manifestó de maneras diferentes en toda la región. En México, un Estado autoritario mantuvo bajo control las ambiciones y las luchas internas de los narcotraficantes, mientras permitía que el mercado creciera y se lucraba con las ganancias de éste[21]. En Colombia, el jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, utilizó la violencia para ejercer poder sobre el Estado, infiltrándose a todos los niveles, desde agentes de policía locales hasta congresistas[22].

[18] Lina Britto, *El boom de la marihuana. Auge y caída del primer paraíso de las drogas en Colombia* (Bogotá, 2022).

[19] Eduardo Sáenz Rovner, *Conexión Colombia: una historia del narcotráfico entre los años 30 y los años 90* (Bogotá, 2021); Carlos G. Arrieta, Luis J. Orejuela, Eduardo Sarmiento y Juan Gabriel Tokatlian, *Narcotráfico en Colombia: dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales* (Bogotá, 1990).

[20] Hace ya un siglo, los grupos criminales mexicanos comenzaron a trazar rutas hacia EE. UU. para satisfacer su apetito de alcohol y narcóticos, inicialmente amapola y heroína, además de marihuana. Guillermo Valdés, *Historia del narcotráfico en México* (Ciudad de México, 2013).

[21] Ibid. "A cambio de la tolerancia, la regulación y la protección ofrecidas por las autoridades locales, éstas esperaban de los delincuentes no sólo ingresos, sino también subordinación política". Ver Mónica Serrano, "States of Violence: State-Crime Relations in Mexico", en W.G. Pansters, *Violence, Coercion, and State-Making in Twentieth-Century Mexico: The Other Half of the Centaur*, (Stanford, 2012) pp. 135-158.

[22] Luis J. Garay Salamanca, Eduardo Salcedo-Albarán, Isaac de León-Beltrán y Bernardo Guerrero, *La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia* (Bogotá, 2008).

Sucesivos gobiernos pasaron una década persiguiendo a Escobar, pero su caída en diciembre de 1993 sólo abrió el camino para que nuevos actores llenaran los lucrativos vacíos. Violentos grupos paramilitares de derecha forjaron lazos con antiguos aliados de Escobar, primero para financiar su lucha contra las guerrillas de izquierda, pero poco después esencialmente para enriquecerse[23]. Los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también intentaron controlar la producción de hoja de coca para financiar su rebelión[24]. En 1999, EE. UU. y Colombia firmaron el Plan Colombia, un paquete de ayuda que alcanzó un valor de más de $10 mil millones de dólares en 15 años, combinando la erradicación e incautación de drogas con una campaña militar de contrainsurgencia y una restructuración de las fuerzas de seguridad locales[25].

C. *La "guerra contra las drogas" y sus consecuencias*

El ejemplo del Plan Colombia inspiró un enfoque similar en México, donde el expresidente Felipe Calderón declaró una "guerra contra las drogas" en 2006, poco después de ganar la presidencia[26]. Con respaldo estadounidense a través de la Iniciativa Mérida, Calderón pretendía desplegar a las fuerzas militares contra el crimen organizado y al mismo tiempo construir instituciones policiales y judiciales más eficaces[27]. Las fuerzas de seguridad mexicanas capturaron o asesinaron a decenas de capos criminales, pero muchas de las causas profundas de la violencia criminal, incluida la persistente corrupción y la pobreza, no fueron abordadas.

A pesar de los aparentes éxitos de las fuerzas de seguridad, las operaciones criminales mexicanas lograron adaptarse y crecer. Las organizaciones ilegales se fragmentaron en una infinidad de grupos más pequeños que se enfrentaron entre sí para afianzarse en diversos negocios ilícitos. En los siguientes 15 años, el número de grupos criminales se multiplicó por diez, pasando de menos de 20 en 2006 a más de 200 en 2021[28]. Entre 2006 y 2016, al menos 73 000 personas fueron asesinadas en casos

[23] "Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales", Fundación Ideas para la Paz, enero de 2013; Gustavo Duncan, *Los señores de la guerra* (Bogotá, 2006).
[24] Jerónimo Ríos Sierra, "La narcotización del activismo guerrillero de las FARC y el ELN, 1998-2012", *Revista UNISCI*, no. 41 (2016).
[25] La eficacia del Plan Colombia todavía es motivo de debate. Si bien los fondos ayudaron a ampliar las operaciones militares y mejoraron las capacidades de las fuerzas armadas colombianas, las tácticas de mano dura resultaron en miles de víctimas civiles y la fumigación de cultivos de coca tuvo un impacto alarmante en la salud pública. Para más información, ver Winifred Tate, *Drugs, Thugs and Diplomats. US Policymaking in Colombia* (Stanford, 2015); Adam Isacson y Abigale Poe, "After Plan Colombia", Center for International Policy, diciembre de 2009; Michael Shifter, "Plan Colombia: A retrospective", *Americas Quarterly,* 18 de julio de 2012.
[26] A medida que el unipartidismo mexicano empezó a desmoronarse a partir de la década de 1980, el control del gobierno central sobre los narcotraficantes se debilitó y los grupos delictivos empezaron a actuar con cada vez con más autonomía. "Con Calderón se rompió entendimiento y subordinación de criminales: Luis Astorga en CNN", *Aristegui Noticias*, 10 de agosto de 2015; Benjamin T. Smith, *The Dope: The Real History of the Mexican Drug Trade* (Londres, 2021).
[27] Clare Ribando Seelke y Kristin Finklea, "U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond", Congressional Research Service, 29 de junio de 2017.
[28] Jane Esberg, "Más que carteles: contando las organizaciones delictivas de México", comentario de Crisis Group, 8 de mayo de 2020.

aparentemente relacionados con el crimen organizado, mientras que otras 70 000 fueron reportadas como desaparecidas entre 2006 y 2021[29].

A medida que se fragmentaron, las redes criminales mexicanas aumentaron su presencia territorial dentro y fuera del país. Creció el papel de los países centroamericanos como centros de tránsito y almacenamiento, en particular Guatemala y Honduras[30]. Para 2011, la cantidad de cocaína incautada en México era una pequeña fracción del total interceptado en Centroamérica, una región que ya enfrentaba una violencia crónica derivada de su legado de guerras civiles[31].

Otro momento crucial en el tráfico de drogas en América Latina se produjo en 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz que desmovilizó a las antiguas FARC, pero también marcó la pérdida del regulador más confiable de la materia prima para la producción de cocaína en Colombia[32]. Aunque los grupos colombianos siguen siendo proveedores clave del mercado de cocaína, no han recuperado su papel de traficantes globales y casi todos los grupos armados del país ahora venden su producto en la frontera o en altamar, mucho antes de que llegue a los consumidores[33]. En efecto, esto ha excluido a los grupos colombianos de las partes más lucrativas de la cadena de suministro del narcotráfico, y las organizaciones criminales del país involucradas en la producción de coca y cocaína ahora dependen de su capacidad para forjar conexiones comerciales internacionales para vender sus productos.

D. *El auge del fentanilo*

Mucho antes de que el dominio de las FARC terminara, las organizaciones criminales mexicanas ya habían asumido un papel protagónico en la configuración del comercio mundial de cocaína. De la mano de una compleja red de inversionistas transnacionales y, en ocasiones, trabajando con el crimen organizado europeo, estos grupos mexicanos se han extendido más profundamente en Suramérica para construir nuevas rutas y evitar los riesgos de interceptación en Colombia. Ecuador, con sus mal prepa-

[29] "Organised Crime Related Homicides 2006-2017, by Reforma", Justice in Mexico Project; "Una guerra inventada y 350,000 muertos en México", *Washington Post*, 14 de junio de 2021.
[30] Gema Santamaría, "La difusión y contención del crimen organizado en la subregión México-Centroamérica", en Juan Carlos Garzón y Eric Olson (eds.), *La diáspora criminal: la difusión transnacional del crimen organizado y cómo contener su expansión* (Washington, 2013).
[31] "Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas", UNODC, 2012, p. 19. En Guatemala, los narcotraficantes aprovecharon la debilidad institucional y la impunidad para infiltrarse en el Estado. El alcance de esta connivencia se convirtió en uno de los motivos de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU en Guatemala (CICIG). Ver "Antecedentes", CICIG, 5 de marzo de 2018. En Honduras, la influencia de los traficantes llegó a lo más alto: en marzo de 2024 el expresidente Juan Orlando Hernández fue condenado por aceptar millones de dólares en sobornos para proteger a los traficantes de cocaína. Ver "Juan Orlando Hernández, Former President of Honduras, Convicted in Manhattan Federal Court of Conspiring to Import Cocaine into the United States and Related Firearms Offenses", Departamento de Justicia de EE. UU., 8 de marzo de 2024.
[32] Las FARC controlaban la gran mayoría de las zonas de cultivo de coca y actuaban como reguladores del negocio. Ver "Informe Final: Hallazgos y Recomendaciones", Comisión de la Verdad de Colombia, junio de 2022, pp. 349-351.
[33] Informe de Crisis Group sobre América Latina N°105, *La incógnita de la "paz total": qué hacer con los gaitanistas,* 19 de marzo de 2024.

radas fuerzas de seguridad, su proximidad a las regiones cocaleras más productivas de Colombia y un gran puerto de contenedores con acceso comercial preferencial a Europa, ha sido el país que más recientemente ha encajado en esta estrategia[34].

Los grupos criminales mexicanos también han encontrado una nueva y lucrativa fuente de ingresos en la producción de drogas sintéticas, primero metanfetamina y luego, a partir de 2014, fentanilo. La producción de este último en México fue iniciada por los Chapitos, una facción del Cartel de Sinaloa encabezada por los hijos del fundador del Cartel, Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, quien fue extraditado a EE. UU. en enero de 2017. La expansión de la producción ha sido "exponencial", según imputaciones de los tribunales estadounidenses[35]. El Cartel importa precursores, a menudo camuflados como productos comerciales normales, de una serie de contactos comerciales de confianza en China y una red de intermediarios dentro y fuera de México, incluso en EE. UU.[36].

El número de laboratorios y cocineros calificados creció a la par, incluyendo nuevas instalaciones y personas que no estaban completamente bajo el control de Sinaloa. En apenas cinco años, México superó a China como fuente de fabricación de fentanilo[37]. Las incautaciones de esta droga en EE. UU. se triplicaron entre 2021 y 2023, pero el flujo continuo de la droga continúa alimentando una epidemia. El fentanilo es ahora la principal causa de muerte en EE. UU. entre los residentes de 18 a 49 años, aunque la mortalidad disminuyó ligeramente en 2023 y 2024[38].

El mercado del fentanilo ha vuelto a frustrar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para frenar su distribución. Los precursores entran a México camuflados, y una vez producido, los traficantes transportan las compactas dosis en paquetes que parecen medicamentos legales. Envían la droga a través de los puertos de entrada a EE. UU., oculta en compartimentos secretos en automóviles, camuflada entre mercancías en tractocamiones o transportada por mulas, generalmente ciudadanos estadounidenses que atraen poca atención al cruzar la frontera. El aumento de las incautaciones en la frontera suroeste de EE. UU. no ha logrado reducir la oferta que llega a los consumidores estadounidenses[39]. La administración Trump ahora está presionando a México para lograr una mayor intervención de las fuerzas de seguri-

[34] "La oleada de violencia del narcotráfico en Ecuador", comentario de Crisis Group, 4 de noviembre de 2022; Renato Rivera-Rhon, "Crimen organizado y cadenas de valor: el ascenso estratégico del Ecuador en la economía del narcotráfico", *URVIO. Revista Latinoamericana De Estudios De Seguridad*, vol. 28 (2020).

[35] *United States vs. Ivan Archivaldo Guzmán Salazar et al.*, Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, 4 de abril de 2023.

[36] Entrevista de Crisis Group, experto en narcotráfico, Ciudad de México, abril de 2024. "The fentanyl funnel: How narcos sneak deadly chemicals through the U.S.", Reuters, 1 de octubre de 2024.

[37] *United States vs. Ivan Archivaldo Guzmán Salazar et al.*, op. cit.

[38] "DEA Releases 2024 National Drug Threat Assessment", DEA, 9 de mayo de 2024; "Provisional Drug Overdose Death Counts", Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., 11 de diciembre de 2024.

[39] Ibid; *United States vs. Ivan Archivaldo Guzmán Salazar et al.*, op. cit.; Aldrin Ballesteros, "Fentanyl Seizures at the Southwest Border: A Breakdown by CBP Areas of Responsibility, Wilson Center, 29 de agosto de 2023.

dad, mientras que México ha pedido a Washington que reduzca a cambio el tráfico ilícito de armas desde EE. UU.[40].

El tráfico mundial de drogas es más resistente y difícil de combatir que nunca. La cadena de suministro está compuesta por una multitud de grupos, muchos de ellos fácilmente reemplazables si se llega a capturar a sus líderes o se desmantelan sus estructuras. Las ganancias de la cocaína se han reinvertido en fentanilo, minería ilegal y trata de personas, pero también en negocios legales. La corrupción permea los niveles más altos de los gobiernos y la extorsión llega hasta las personas más vulnerables de la sociedad.

[40] "Presidenta de México: Aranceles se pausan un mes; se establecerán mesas de trabajo con el gobierno de EUA en materia de seguridad y comercio", comunicado de prensa, Presidencia de México, 3 de febrero de 2025.

III. **Redes criminales**

Las redes criminales organizadas hoy en día manejan cadenas de suministro complejas que abarcan países y continentes, compuestas por unidades especializadas más pequeñas que operan con una autonomía considerable. Dentro de estas redes criminales, en América Latina se destacan cuatro niveles de operaciones: financiación y gestión, tráfico internacional, producción y tráfico a nivel nacional, y control y distribución urbana. No se trata de categorías completamente fijas, ya que algunas organizaciones ocupan varios niveles del proceso de tráfico de drogas.

En términos generales, las ganancias se concentran en el transporte internacional a los mercados de consumidores o donde se corren los mayores riesgos financieros, por ejemplo, por parte de los inversores primarios[41]. La violencia, por otra parte, es más intensa en las zonas ocupadas por grupos criminales locales, que a menudo compiten por el control de territorios cruciales para la exportación de drogas o su venta local, y donde encuentran otras fuentes de ingresos a través de actividades ilegales como la extorsión y el secuestro extorsivo. En todos los niveles, las organizaciones criminales buscan corromper, cooptar o coaccionar a funcionarios y otras personas que puedan garantizar su protección e impunidad. A menudo, los funcionarios colaboran con las redes criminales o incluso forman parte de ellas, poniendo el poder del Estado al servicio de las actividades ilegales.

A. *Financiación y gestión*

Como toda empresa transnacional, el narcotráfico requiere inversores y administradores que aporten capital inicial y organicen transacciones complejas. Conocidos en algunas partes de América Latina como "narcos invisibles", esta capa de la operación es la principal responsable de decidir dónde invertir, cómo gestionar las rutas, con qué clientes trabajar y en qué jurisdicciones operar[42]. Esta planificación es especialmente importante para enviar cocaína a Europa y la importación de precursores de fentanilo a México, dada la compleja logística y las enormes ganancias en juego. Los administradores pueden mover fondos a diferentes proveedores logísticos, primero

[41] Sobre la concentración de ganancias entre traficantes internacionales, ver Manuel Sánchez-Pérez, María Belén Marín-Carrillo, María Dolores Illescas-Manzano y Zohair Souilim, "Understanding the Illegal Drug Supply Chain Structure: A Value Chain Analysis of the Supply of Hashish to Europe", *Humanities and Social Sciences Communications*, vol. 10 (2023), p. 276

[42] Los casos judiciales suelen ofrecer las mejores perspectivas sobre estas redes. Varios casos en Panamá entre 2022 y 2024 incluyeron órdenes de arresto contra financieros que operaban desde los Emiratos Árabes, España, Francia, Bélgica y Países Bajos, como parte de una red vinculada a narcotraficantes irlandeses, italianos, bosnios y holandeses-marroquíes. "Confirman que en Panamá hay personas que cooperaban con el cartel de Dubái", TVN, 1 de diciembre de 2022; "A notorious drug kingpin set up shell companies in the British Virgin Islands and Dubai to employ alleged cartel underlings, documents show", International Consortium of Investigative Journalists, 20 de agosto de 2024; "Montenegrin National Charged in Brooklyn Federal Court with Maritime Narcotrafficking of Over 20 Tons of Cocaine", comunicado de prensa, Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, 31 de octubre de 2022.

para probar y luego consolidar las rutas[43]. Un exintegrante de un grupo armado describió a Crisis Group cómo funciona esta subcontratación:

> Los capitalistas son la gente de corbata, empresarios que llegan siempre al país, son una empresa [del narcotráfico]. Empiezan a contactar a los pequeños empresarios… les dan su porcentaje. Ponen la logística, y ellos contratan otros logísticos más pequeños. De allá, [los pequeños empresarios] contratan personas de confianza de los barrios, a esa persona les ofrecen un porcentaje. Todo es una [cadena] logística[44].

Esta tercerización limita los riesgos de detenciones y judicialización de los inversores, que son muy cuidadosos al proteger su identidad y limitan su contacto directo con organizaciones armadas[45]. Los inversores suelen estar apartados de las partes más vigiladas de la cadena de suministro, en particular las que participan en la exportación y el transporte de drogas. Suelen enviar emisarios e intermediarios a puntos en la cadena de tráfico para organizar los envíos y garantizar la cooperación de los actores de niveles inferiores[46]. Según un criminal convicto, los inversionistas en Ecuador "sólo se reúnen con los grandes [líderes de los grupos armados]… para poner las condiciones, organizar el trabajo: ustedes [el grupo armado] ganarán tal cantidad, estas son las condiciones, estas son las tareas que deben cumplir. Luego, [esos líderes] negocian con otras bandas locales"[47]. Otra persona cercana al narcotráfico explicó: "Hoy, el jefe criminal puede ser cualquier persona, de civil, en un restaurante o un yate, con varios celulares y ninguna conexión obvia a los armados"[48].

En el caso del fentanilo, los empresarios discretos son esenciales para acceder al sistema bancario formal y al comercio internacional[49]. Estos individuos, conocidos como "*brokers*", también desempeñan un papel vital en la importación de precursores químicos, principalmente de China[50]. Sus conexiones incluyen exportadores en China, así como empresas legales en México con razones legítimas para importar productos químicos y bufetes de abogados con experiencia en procedimientos admi-

[43] Entrevista de Crisis Group, funcionario de inteligencia, mayo de 2024. Dada la complejidad de estas redes, los inversores suelen estar especializados y centrarse en una ruta o producto. Ver, por ejemplo, el memorando de sentencia en *United States vs. Sergio Fernando Cifuentes Sagastume*, Distrito Sur de California EE. UU., 11 de octubre de 2023.

[44] Entrevista de Crisis Group, Guayaquil, mayo de 2024.

[45] Ver, por ejemplo, "El ecosistema criminal en el Ecuador: Líneas de Acción", op. cit.

[46] Por ejemplo, en los últimos años se ha detenido a varios jefes del crimen organizado de los Balcanes por financiar y gestionar rutas de cocaína desde Ecuador y Brasil hacia el sur de Europa. Estos jefes contratan a otros delincuentes a través de emisarios. Entrevistas de Crisis Group, funcionarios de seguridad y exmiembros de pandillas, Guayaquil, mayo de 2024. Ver también "How Balkan gangsters became Europe's top cocaine suppliers", Reuters, 2 de mayo de 2024. Las autoridades estiman que unos 2000 migrantes de los Balcanes trabajan en operaciones criminales en Ecuador. Entrevistas de Crisis Group, fuente de seguridad europea, mayo de 2024; funcionario naval ecuatoriano, Guayaquil, mayo de 2024.

[47] Entrevista de Crisis Group, Guayaquil, mayo de 2024.

[48] Entrevista de Crisis Group, abogado, Cartagena, octubre de 2023.

[49] "Money Laundering from Fentanyl and Synthetic Opioids", Financial Action Task Force, noviembre de 2022, pp. 16.

[50] "The shadowy 'brokers' helping Mexico's cartels smuggle fentanyl chemicals from China", Reuters, 18 de diciembre de 2024.

nistrativos y legales para la importación de mercancías[51]. Estos operadores también supervisan los esfuerzos para corromper e infiltrar a los trabajadores portuarios, quienes se ven obligados a aceptar los sobornos que se les ofrecen o enfrentar violentas represalias[52]. Los funcionarios estadounidenses consideran que los *brokers* son eslabones cruciales en las cadenas de suministro y recientemente han comenzado a imputarlos[53].

El poder que ejercen los inversores sobre el mercado de la droga es enorme. Pueden ayudar a decidir quiénes resultan ganadores y perdedores entre las organizaciones armadas del narcotráfico, como ocurrió tras el acuerdo de paz de 2016 en Colombia. Una persona cercana al narcotráfico explicó que, cuando parecía probable que el acuerdo fuera ratificado, los inversores inyectaron grandes cantidades de dinero para impulsar los cultivos de coca en el país y así garantizar que se mantuviera una abundante oferta cuando uno de los principales actores del lado de la producción abandonara el mercado[54]. Estos financistas también han sido responsables de la expansión de los cultivos de coca en Centroamérica a través de inversiones en Honduras y Guatemala; en este último caso contratando a agricultores colombianos experimentados para establecer las operaciones[55].

Al proporcionar capital y coordinar las innumerables conexiones entre los centros de producción y los mercados de consumo, estos operadores logran quedarse con una gran parte de las ganancias, la cual reinvierten en la expansión de su negocio de narcotráfico o en otros mercados legales o ilegales[56]. Penetrar en la élite empresarial y política de países clave a lo largo de la cadena de suministro, así como en paraísos fiscales como Dubái y Panamá, es fundamental para su capacidad de lavar activos y acceder al sistema bancario. Se cree, por ejemplo, que la huella del Cartel de Jalisco Nueva Generación se extiende sobre empresas y bancos en casi todos los continentes, lo que le permite al grupo eludir a las fuerzas de seguridad con relativa facilidad[57]. Según un delincuente convicto, "la mayor parte de inversionistas del narcotráfico son políticos, empresarios"[58].

[51] Entrevista de Crisis Group, *broker* aduanero, Colima, abril de 2024.
[52] Entrevista de Crisis Group, extrabajador del puerto de Manzanillo, Colima, abril de 2024.
[53] "2 Mexican nationals charged with conspiring to traffic meth precursors, synthesized meth following HSI Houston, DEA investigation", comunicado de prensa, Homeland Security Investigations, 10 de febrero de 2023.
[54] Entrevistas de Crisis Group, junio y julio de 2023. Los cultivos de coca comenzaron a expandirse en 2014 en medio de promesas de que el programa de sustitución del acuerdo de paz les daría apoyo financiero a los cultivadores de coca. Poco después, los inversionistas comenzaron a inyectar dinero para aumentar la oferta. Campesinos de toda Colombia dijeron a Crisis Group que en ese momento llegaron extraños ajenos a sus comunidades con promesas de realizar pagos por adelantado, financiar insumos para los cultivos y otros incentivos para plantar coca.
[55] Entrevista de Crisis Group, líder comunitario, Alta Verapaz, junio de 2024.
[56] Entrevista de Crisis Group, experto en el mercado de drogas, Bogotá, noviembre de 2020; ver también "Complexities and conveniences in the international drug trade: the involvement of Mexican criminal actors in the EU drug market", Europol y Departamento para la Lucha contra las Drogas (DEA), 5 de diciembre de 2022.
[57] "The Expansion and Diversification of Mexican Cartels: Dynamic New Actors and Markets", International Institute for Strategic Studies, 12 de diciembre 2024.
[58] Entrevista de Crisis Group, junio de 2023.

B. *Tráfico internacional*

El tráfico internacional comienza con la compra de materias primas o sustancias precursoras en el exterior, sigue con su procesamiento y envío transnacional, y termina con la entrega al mercado de consumo, generalmente en Europa o EE. UU. Estos traficantes pueden ser considerados como los "dueños" de las rutas internacionales, por ejemplo, de Guayaquil a Rotterdam, de Cartagena a Miami o de Manzanillo a Nueva York. Una organización criminal generalmente organiza cada trayecto, con subcontratistas que cumplen funciones específicas, como el almacenamiento y la entrada y salida de los puertos a lo largo del camino[59]. Hay un número limitado de organizaciones criminales que cuentan con los contactos, así como los niveles de sofisticación en el transporte marítimo, aéreo y terrestre que requiere esta etapa[60]. La mayor parte de la logística transnacional recae en organizaciones criminales de renombre como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación de México o el Primeiro Comando da Capital de Brasil, así como en un número limitado pero creciente de grupos criminales europeos.

El tráfico transfronterizo es sumamente rentable. El precio de las drogas se multiplica varias veces de principio a fin. Entrevistas de Crisis Group indican que un kilo de pasta base de coca que sale del sur de Colombia hacia Ecuador se vende por aproximadamente $550 dólares en la frontera, $800 en la provincia fronteriza ecuatoriana de Esmeraldas y $1000 cuando llega al puerto de Guayaquil[61]. Después de refinada, en 2021 el precio mayorista de la cocaína a la salida de Ecuador era de aproximadamente $2000 dólares el kilo, subiendo a $40 000 en Europa Occidental[62]. En otras palabras, la mayor parte de las ganancias del mercado de la cocaína termina en manos de los traficantes internacionales y de los inversores que los respaldan[63]. Mientras tanto, el precio del fentanilo terminado que se vende en las calles estadounidenses puede representar un margen de ganancia de 200 a 800 veces el costo de los precursores químicos utilizados para producirlo[64].

En el caso de las drogas orgánicas, el primer paso en esta parte de la cadena de suministro es la compra del producto a un proveedor. Los proveedores suramericanos ponen su producto bajo la custodia de traficantes internacionales mexicanos en

[59] Los dos principales carteles que transportan fentanilo desde México a EE. UU., por ejemplo, "pueden considerarse grupos paraguas: redes no muy unidas con los contactos, la infraestructura y los medios para mover cargamentos de múltiples drogas a través del tramo de territorio que representa el mayor riesgo". "Mexico's Role in the Deadly Rise of Fentanyl", Wilson Center, febrero de 2019, p. 19.

[60] El Cartel de Sinaloa tiene presencia en al menos 45 países para coordinar operaciones de narcotráfico y lavado de dinero, "United States vs. Ivan Archivaldo Guzmán Salazar et al.", op. cit.

[61] Entrevistas de Crisis Group, cultivadores de coca y expertos en el mercado de drogas, Puerto Guzmán y Guayaquil, febrero y mayo de 2024.

[62] Estos datos están corroborados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En 2020, un kilogramo de hoja de coca en Colombia se vendía por aproximadamente $0,62 dólares, mientras que un kilogramo de cocaína refinada se vendía por $33 000 dólares en Bélgica. "Drug Trafficking and Cultivation: Drug Prices", UNODC.

[63] Ibid.

[64] *United States vs. Ivan Archivaldo Guzmán Salazar et al.*, op. cit; "How El Chapo's sons built a fentanyl empire poisoning America", Reuters, 9 de mayo de 2023; "Fentanyl", Reuters, 9 de agosto de 2023.

puertos marítimos, aeropuertos o inmediatamente después de la exportación en altamar, incluso en Colombia y Ecuador[65]. En el caso de drogas sintéticas como el fentanilo, los traficantes internacionales como el grupo mexicano Los Chapitos (una facción del Cartel de Sinaloa), controlan sus propios laboratorios y también compran a cocineros y grupos criminales aliados más pequeños, que pueden ser contratados para proteger laboratorios independientes[66]. Los traficantes internacionales organizan compras de droga a gran escala a través de emisarios, quienes explican las condiciones a los grupos criminales nacionales. Por ejemplo, algunos grupos de traficantes exigen que el proveedor sea absolutamente leal y no les venda a organizaciones rivales[67].

En esta etapa también se regula la calidad del producto. En el caso del fentanilo, esto implica supervisar la producción, apariencia y costo de la droga[68]. Mientras tanto, los compradores internacionales de cocaína insisten cada vez más en un nivel de pureza muy superior al 95 por ciento[69]. En ocasiones han fijado un precio fijo para la compra de la droga, dejando que los proveedores locales compitan para ver quién puede cumplir mejor los estándares requeridos sin dejar de obtener ganancias[70]. Una vez que los traficantes internacionales toman posesión de la droga, utilizan una serie de sofisticados métodos para hacer llegar el producto a través de las fronteras.

Calcular el balance adecuado entre riesgos y ganancias es fundamental para determinar cómo direccionar cualquier cargamento de drogas. Gran parte de la ruta de suministro transnacional puede depender de la subcontratación de otros grupos, que puedan encargarse del almacenamiento temporal en el caso del tráfico de cocaína a través de Centroamérica, o del movimiento a través de una frontera terrestre específica[71]. Los traficantes también parecen estar creando nuevas estaciones de paso en países con capacidades de control más débiles. Costa Rica, que durante mucho tiempo había logrado evitar ser absorbida por las rutas internacionales del narcotráfico, es un ejemplo destacado. Cocaína y marihuana llegan ahora en grandes cantidades a sus costas en el Pacífico y el Atlántico, lo que ha generado un auge de grupos criminales locales que buscan asociarse con operaciones de narcotráfico más grandes. La

[65] Informe de Crisis Group, *La incógnita de la "paz total": qué hacer con los gaitanistas,* op. cit.; entrevista de Crisis Group, funcionario naval, Guayaquil, mayo de 2024.

[66] Entrevistas de Crisis Group, periodistas y expertos, Baja California y Ciudad de México, marzo y abril de 2024. Ver también *United States vs. Ivan Archivaldo Guzmán Salazar et al.*, op. cit.

[67] Entrevista de Crisis Group, académico, Washington, junio de 2024.

[68] Entrevistas de Crisis Group, personas con conocimiento de logística portuaria, Manzanillo, abril de 2024. Ver también Victoria Dittmar and Paulina Ríos, "Los productores de fentanilo en México se adaptan a los retos del mercado", *Insight Crime*, 22 de enero de 2025.

[69] Entrevista de Crisis Group, policía colombiano, Lisboa, junio de 2024.

[70] Por ejemplo, en Nariño, Colombia, el precio fijo por kilo de cocaína para los compradores internacionales se estableció en aproximadamente $1200 dólares. Los grupos de vendedores locales tuvieron que encontrar una manera de reducir sus propios costos sin perder la calidad, para poder obtener un alto porcentaje de la venta como ganancia. Como resultado, los cultivadores de coca pasaron de recibir aproximadamente $700 dólares a $250 dólares por kilo. Entrevista de Crisis Group, líder comunitario, Popayán, junio de 2023.

[71] Por ejemplo, una ruta para la cocaína organizada por el Cartel de Jalisco Nueva Generación presuntamente transporta cocaína de disidentes de las antiguas FARC en Colombia a Los Huistas de Guatemala, que a su vez la transfieren al Cartel de Jalisco o a sus aliados locales en México, y de ahí a la frontera estadounidense. "Nexos entre Los Huistas de Guatemala, Cártel Jalisco Nueva Generación y disidentes de las FARC", *El Faro*, 2 de septiembre de 2022.

tasa de homicidios se disparó un 40 por ciento en 2023, aproximadamente el 70 por ciento de los cuales están relacionados con el narcotráfico, según las autoridades[72].

Con los mismos cálculos de ganancias en mente, los traficantes prefieren cada vez más transportar cocaína o su formato sin refinar, la pasta de coca, en buques portacontenedores hacia Europa, en lugar de utilizar métodos más tradicionales como aviones pequeños, lanchas rápidas o submarinos (aunque estos también se siguen utilizando)[73]. Los contenedores no sólo transportan un gran volumen de producto, sino que las empresas traficantes pueden predecir matemáticamente qué porcentaje, en promedio, de sus envíos será incautado (entre el 2 y el 10 por ciento, según las autoridades) y luego ajustar el precio de venta final para subsanar esas pérdidas[74].

Los traficantes llegan a niveles extremos para explotar el transporte internacional en contenedores. Introducir droga en los contenedores, un proceso conocido como "contaminación" en Suramérica o "llenar la piñata" en México, puede adoptar formas muy diversas, como ocultar la cocaína dentro de otro producto, dentro de la estructura del contenedor o dentro del propio barco. En Ecuador, la cocaína suele ocultarse dentro de cargamentos de bananos, un producto que se prefiere porque el contenedor se carga directamente en las fincas y debe transportarse rápidamente por los puertos para evitar que se eche a perder[75]. La droga también puede ser cargada en los barcos por trabajadores portuarios corruptos que tienen acceso a códigos únicos para identificar, abrir y luego acceder a los contenedores. Las organizaciones criminales también han comenzado a utilizar productos químicos para camuflar el olor característico de la pasta base de coca, de modo que no pueda ser detectada por escáneres ni perros; posteriormente ésta se refina en Europa[76].

Para evitar las inspecciones portuarias, los traficantes cargan su producto en los buques portacontenedores en altamar con la colaboración de al menos algunos miembros de la tripulación[77]. Una fuente de seguridad explicó: "Inicialmente, los traficantes pedían al buque que se detuviera en altamar para cargar el producto. Pero las armadas se dieron cuenta y comenzaron a realizar operaciones de control en los por-

[72] Entrevistas de Crisis Group, fuentes de seguridad internacionales, marzo y abril de 2024; diplomático con sede en San José, junio de 2024. Ver también Maria Abi-Habib, "How a Tourist Paradise Became a Drug-Trafficking Magnet", *The New York Times,* 15 de septiembre de 2024; y "Bandas de narcos fijan Costa Rica como objetivo", *Euronews,* 12 de febrero de 2024.

[73] Entrevistas de Crisis Group, experto en mercado de drogas, Popayán y Bogotá, junio y noviembre de 2023.

[74] "Criminal Networks in EU Ports: Risks and Challenges for Law Enforcement", Europol/Comité Directivo de Seguridad de los puertos de Amberes, Hamburgo/Bremerhaven y Rotterdam, marzo de 2023. Como punto de comparación, la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de EE. UU., encargada de la interceptación en el Caribe, cree que captura aproximadamente el 10 por ciento de la droga que llega a EE. UU. Entrevista de Crisis Group, académico, Washington, junio de 2024.

[75] Aproximadamente el 53 por ciento de todos cargamentos en los que las autoridades ecuatorianas encontraron drogas eran contenedores con bananos. Entrevista de Crisis Group, fuente de seguridad, Guayaquil, mayo de 2024.

[76] Entrevistas de Crisis Group, funcionarios de la agencia antidrogas de la UE, abril de 2024. Ver también "Criminal Networks in EU Ports", op. cit.

[77] Entrevista de Crisis Group, fuente de inteligencia, mayo de 2024.

tacontenedores que se detenían. Entonces, los traficantes empezaron a contaminar los barcos a toda velocidad, abordando desde pequeñas lanchas rápidas"[78].

Después de ser cargados con droga en América Latina, los buques también pueden ser recibidos antes de su llegada al destino final en Europa mientras aún están en altamar. Una vez más, lanchas rápidas se acercan al barco en movimiento, y toman los paquetes que cómplices en la tripulación tiran por la borda. Los traficantes en México utilizan un método similar para descargar precursores de fentanilo o cocaína: los buques portacontenedores se detienen justo en la frontera marítima antes de ingresar a aguas mexicanas, donde lanchas rápidas recogen los productos y los trasladan a tierra. Desde allí, los precursores se transportan principalmente por carretera[79]. Si la droga debe retirarse en el puerto de llegada, los traficantes pueden intentar ocultar su rastro desviando los envíos hacia contenedores que provengan de lugares menos sospechosos, como Costa Rica, Panamá o Guyana[80].

El transporte a gran escala es un buen método para camuflar tanto los precursores como las drogas sintéticas. Los traficantes suelen preferir los puertos más grandes porque el gran volumen de mercancías entrantes hace más fácil evitar la detección[81]. Los traficantes internacionales etiquetan los precursores como carga legítima, los ocultan en otros productos o incluso los disfrazan químicamente para evitar su detección[82]. En otros casos, los precursores de fentanilo se envían directamente por correo a direcciones alquiladas por los grupos criminales con el único propósito de que sirvan como puntos de entrega discretos[83]. Los envíos hacia el norte, a EE. UU., también requieren el control de ciertos corredores, como las redes de carreteras entre estas ciudades portuarias y la frontera sur de EE. UU.[84]. Las organizaciones narcotraficantes mexicanas recurren al transporte aéreo, submarinos y una extensa red de túneles hacia EE. UU. para transportar fentanilo y otras drogas, según documentos judiciales[85].

Para eludir la interceptación, los traficantes crean amplias redes de corrupción sobornando a funcionarios de diversos niveles, incluidos trabajadores portuarios, pilotos, empleados de líneas aéreas y compañías navieras, oficiales en las armadas y

[78] Entrevista de Crisis Group, fuente de seguridad internacional, enero de 2024. Los traficantes que trasladan lanchas rápidas hacia los buques portacontenedores son conocidos en Suramérica como micos.
[79] Entrevistas de Crisis Group, líder local y oficial de seguridad local, Colima, marzo de 2024.
[80] Entrevistas de Crisis Group, fuente de inteligencia naval, mayo de 2024; fuente de inteligencia internacional, enero y febrero de 2024; diplomático con base en Costa Rica, junio de 2024.
[81] Recientes casos de lavado de dinero plantean interrogantes sobre la posible participación de la delincuencia organizada albanesa en el tráfico en puertos mexicanos más pequeños, como Ensenada y Rosarito, Jesusa Cervantes, "BC y sus casinos, el paraíso para lavar dinero sucio", *Infosavia*, 6 de noviembre de 2023.
[82] Entrevistas de Crisis Group, *broker* aduanero, exgerente portuario y periodistas, Colima y Baja California, febrero y marzo de 2024. *United States vs. Ivan Archivaldo Guzmán Salazar et al.*, op. cit.
[83] Entrevista de Crisis Group, exoficial de seguridad nacional, Colima, marzo de 2024.
[84] Entrevistas de Crisis Group, exgerente portuario, extrabajador portuario, oficiales de seguridad locales y nacionales, periodistas, Colima y Baja California, marzo y abril de 2024. Es probable que, por ejemplo, uno de los atractivos del puerto de Colima sea su red de carreteras y ferrocarriles, que lo conecta con el centro de México y con ciudades del norte como Ciudad Juárez y Matamoros.
[85] *United States vs. Ivan Archivaldo Guzmán Salazar et al.*, op. cit.

fuerzas de seguridad internacionales y políticos de alto rango[86]. Honduras ofrece un ejemplo extremo. Tras un golpe de Estado en 2009, el Cartel de Sinaloa y otros grupos criminales hicieron grandes inversiones para asegurarse de contar con aliados en el poder, incluido el presidente. Como resultado, la mayor parte de la cocaína traficada desde Suramérica a EE. UU. podía contar con Honduras como punto de transbordo[87]. El principal arquitecto de la guerra contra las drogas en México desde finales de 2006 hasta 2012, Genaro García Luna, también fue encontrado culpable en EE. UU. en 2023 por aceptar sobornos del Cartel de Sinaloa para proteger los envíos de droga del grupo a EE. UU. y sentenciado a más de 38 años de prisión en octubre de 2024[88].

C. *Producción y tráfico a nivel nacional*

Con excepción de México, donde ciertos grupos criminales están en el centro de las operaciones de tráfico internacional, el crimen organizado a nivel nacional tiene un espectro más limitado de responsabilidades en el comercio de drogas. Estos grupos suelen encargarse de garantizar el suministro de producto a los traficantes internacionales, o de gestionar ese producto a lo largo de una parte determinada de la ruta de tráfico. Usualmente hay muchos más grupos nacionales de este tipo que compradores internacionales de sus productos y servicios. Los grupos nacionales compiten ferozmente por conseguir las codiciadas relaciones transnacionales. En palabras de un oficial de la armada ecuatoriana, grupos como Los Choneros o Los Lobos "quieren demostrar a los emisarios [internacionales] que tienen el control, y la forma para hacer eso es por medio de la violencia"[89].

Para la producción de drogas orgánicas de mayor volumen, los delincuentes que operan a nivel nacional deben mantener cierto control territorial en las zonas de producción, almacenamiento y refinación. Por ejemplo, los delincuentes deben mantener los campos de coca a salvo de las fuerzas de seguridad y de otras organizaciones rivales. Violentas guerras territoriales por la materia prima son habituales. En Putumayo, en el lado colombiano de la frontera con Ecuador, la competencia por controlar la compra de pasta de coca es tan feroz que, según informes, dos grupos rivales de la zona se han disfrazado de sus competidores y han entrado en las zonas de producción de coca para identificar a los campesinos dispuestos a vender coca al grupo "equivocado"[90]. Los grupos criminales que logran asegurar la hegemonía sobre regiones o rutas, como el Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como el Clan del

[86] Ibid. Según un alto funcionario argentino, "el crimen organizado se está convirtiendo en un actor político en la región". Entrevista de Crisis Group, Lisboa, junio de 2024.
[87] Ver el memorando de sentencia del gobierno en *The United States of America vs. Fredy Renan Nájera Montoya*, Distrito Sur de Nueva York, EE. UU., 23 de diciembre de 2020; "Juan Orlando Hernández, Former President of Honduras, Sentenced to 45 Years in Prison for Conspiring to Distribute More Than 400 Tons of Cocaine and Related Firearms Offenses", Departamento de Justicia de EE. UU., 26 de junio de 2024.
[88] "Ex-Mexican Secretary of Public Security Genaro Garcia Luna Sentenced to Over 38 Years' Imprisonment", comunicado de prensa, Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, 16 de octubre de 2024.
[89] Entrevista de Crisis Group, funcionario naval, Guayaquil, mayo de 2024.
[90] Entrevista de Crisis Group, funcionario de monitoreo internacional, Mocoa, febrero de 2024. En la misma región, compradores ecuatorianos de pasta de coca han sido asesinados, aparentemente por intentar invadir su territorio.

Golfo, a menudo tienen mucho más éxito a la hora de forjar relaciones estables con los compradores, en este caso con el Cartel de Sinaloa[91].

En cuanto a las drogas sintéticas, los grupos criminales nacionales buscan controlar los puertos para importar los precursores químicos, proteger a los cocineros e intermediarios que fabrican la droga y suministrar el producto final a los traficantes internacionales[92]. Estos grupos deben cumplir las condiciones de los compradores: el fentanilo, por ejemplo, debe estar empacado en bolsas Ziploc con el nombre del traficante internacional y un logotipo o color distintivo[93].

México presenta un entramado de acuerdos bastante diferente debido a la influencia de sus principales grupos criminales no sólo en el tráfico nacional, sino también en el comercio internacional de drogas. Las relaciones entre los dos principales grupos criminales involucrados en el tráfico internacional, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y las operaciones regionales más pequeñas son fluidas. En ocasiones, estos grupos más pequeños pagan por utilizar las rutas controladas por las organizaciones dominantes. Por ejemplo, varios inversores locales pueden aliarse para un proyecto financiado colectivamente para enviar cocaína o metanfetamina a EE. UU., incluido el costo de pagar a uno de los grupos principales por acceso al puerto o paso seguro a través de México. Al mismo tiempo, más pequeños han logrado consolidar su control sobre un territorio específico, como La Línea en Chihuahua, el Cartel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato o el Cartel del Noreste en Tamaulipas, puede darles poder para cobrar a los traficantes nacionales por operar allí[94].

Las estrategias para controlar la producción y el transporte interno varían mucho de un país a otro, aunque todas implican violencia contra civiles y grupos rivales. Los grupos criminales colombianos involucrados en el narcotráfico generalmente buscan el control físico del territorio, en gran parte como legado de décadas de conflicto armado. En los países de tránsito, el control territorial extensivo es menos vital. Los principales grupos criminales ecuatorianos concentran sus actividades a lo largo de los corredores de tráfico, que incluyen carreteras y ríos. Las fuerzas de seguridad describen estos territorios como "santuarios", donde se concentran estratégicamente los activos criminales[95].

Captar el poder estatal es vital para que los grupos nacionales puedan satisfacer las expectativas de los compradores internacionales y no perder cargamentos por in-

[91] Los Gaitanistas han logrado distinguirse por su control territorial y la entrega eficiente de sus productos, lo que les ha permitido establecer sólidas relaciones con los compradores. Otros grupos, como las facciones disidentes de las FARC, han tenido dificultades para encontrar compradores confiables, a menudo no han podido vender su producto y han visto caer drásticamente los precios de la cocaína en sus territorios.

[92] La ciudad portuaria de Manzanillo, en Colima, por ejemplo, ha experimentado un abrupto aumento de la violencia que, según funcionarios de seguridad locales, está relacionado con la competencia entre grupos nacionales por asegurar la entrada de precursores. Entrevistas de Crisis Group, funcionarios de la SEDENA, funcionario de seguridad local y líderes locales, Colima, abril de 2024.

[93] Entrevistas de Crisis Group, oficial de seguridad nacional, periodista y líderes locales, Ciudad de México y Baja California, abril de 2024.

[94] Entrevistas de Crisis Group, funcionarios de seguridad locales y nacionales, Colima y Ciudad de México, marzo y mayo de 2024.

[95] Entrevistas de Crisis Group, funcionarios de seguridad, Guayaquil, mayo de 2024; persona con conocimiento directo del sector bananero, Guayaquil, mayo de 2024.

cautaciones o enfrentar ofensivas por parte de las fuerzas de seguridad. En este caso, los principales objetivos son las autoridades locales y, en menor medida, las nacionales; jueces, fiscales, oficiales de la policía y las fuerzas de seguridad, así como miembros de las élites empresariales regionales[96]. Los grupos criminales necesitan combinar la protección armada con vínculos empresariales, jurídicos, estatales y políticos para poder operar sin problemas, según explicó un exjefe de la Policía Nacional de Ecuador[97]. También pueden ejercer poder en las prisiones, que durante mucho tiempo han desempeñado un papel como centros de operaciones para el crimen organizado. Tras las rejas, los jefes criminales están relativamente a salvo de los peligros de la vida delictiva, ya sean las fuerzas de seguridad o sus rivales, y pueden organizar transacciones y reclutar nuevo personal (para más información, ver Sección IV.E)[98].

D. *Control y distribución urbana*

Muchos grupos criminales más grandes han calculado que, en vez de mover las drogas ellos mismos, es más barato, fácil y discreto establecer alianzas en áreas urbanas con bandas locales, muchas de las cuales anteceden a la irrupción del narcotráfico[99]. Estos grupos hiperlocales terminan desempeñando dos funciones clave en la cadena de suministro: transportar el producto de manera segura a través de las ciudades en ruta hacia la exportación y expandir los mercados locales de venta de droga al por menor[100].

Las bandas locales son útiles porque pueden controlar barrios densamente poblados, distraer o corromper a la policía local, y generar dinero para sus clientes más importantes a través del narcotráfico y la extorsión. Buenaventura, la ciudad donde se ubica el puerto de contenedores más grande de Colombia, alberga dos pandillas dominantes que reciben pagos de grupos armados más grandes por proteger su producto al entrar y salir de la zona urbana hacia el puerto[101]. De la misma manera, las

[96] Casos judiciales han revelado hasta qué punto Los Cachiros en Honduras trabajaron con políticos electos y élites para lavar ganancias del narcotráfico. Ver "Former Honduran Congressman And Businessman Sentenced To 36 Months For Money Laundering", Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, 15 de diciembre de 2017.

[97] Entrevistas de Crisis Group, Quito, abril de 2024.

[98] En Ecuador, "se confirmó lo que presumíamos: que las cárceles se habían convertido en centros de operaciones del crimen transnacional", dijo un diplomático. Entrevista telefónica de Crisis Group, mayo de 2024. Ver también Maria Abi-Habib, Annie Correal y Jack Nicas, "In Latin America, Guards Don't Control Prisons, Gangs Do", *The New York Times,* 21 de febrero de 2024.

[99] Aunque muchas pandillas latinoamericanas participan en partes de la cadena de suministro de drogas, esto no es central para todas ellas. La Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en El Salvador se han involucrado en el narcotráfico a pequeña escala, pero su principal fuente de ingresos ha sido durante mucho tiempo la extorsión. Ver "El Salvador: Background and U.S. Relations", Congressional Research Service, enero de 2024; informe de Crisis Group, *El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en Centroamérica,* op. cit.

[100] Entrevistas de Crisis Group, oficiales de seguridad locales, oficiales de la SEDENA, líderes locales, periodistas y oficial de seguridad nacional, Colima, Baja California y Ciudad de México, marzo-mayo de 2024.

[101] Entrevistas de Crisis Group, funcionarios de seguridad y líderes locales, Buenaventura, febrero de 2024.

pandillas ecuatorianas que operan a lo largo del canal de Guayaquil que conduce al mar almacenan la droga en casas y se les puede pedir que la trasladen en lanchas rápidas a sitios de contaminación en puertos privados a lo largo de la vía fluvial[102]. A cambio, los grupos criminales más grandes dotan a los hombres fuertes del barrio de armas y prestigio que les permiten dedicarse a actividades depredadoras como la extorsión, el secuestro y la regulación de otros mercados como el trabajo sexual, los juegos de azar, clubes nocturnos y el tráfico de migrantes.

La historia del origen de estos grupos locales varía de un país a otro, pero todos tienen rasgos comunes: las vidas de sus miembros son prescindibles, mientras que la violencia en este nivel de la cadena de suministro tiende a ser la más intensa de todas. La competencia entre bandas locales para asegurarse una tajada de la economía ilícita es feroz y frecuente. A menudo, sólo se calma cuando un grupo logra imponerse o cuando los rivales llegan a una tregua. La ciudad portuaria colombiana de Santa Marta, por ejemplo, está dominada por una única organización criminal cuyas principales fuentes de ingresos son los cobros por impuestos de protección y tarifas por el tránsito de cargamentos de cocaína[103]. En Monterrey, México, una tregua de facto entre pandillas parece haber sido crucial para reducir la violencia después de un aumento masivo de asesinatos entre 2009 y 2013[104].

Las pandillas son útiles para sus aliados criminales más grandes de varias maneras. Las autoridades ecuatorianas creen que los grupos armados nacionales más grandes fomentan las peleas entre pandillas para distraer a las fuerzas de seguridad de sus propios movimientos[105]. Aunque no todos los casos de violencia urbana siguen esta misma lógica, esta sí acapara una cantidad desproporcionada de atención mediática y política cuando ocurre, absorbiendo los limitados recursos policiales[106].

Las pandillas también impulsan los mercados de consumo locales, que ahora son fuentes lucrativas de ingresos en efectivo y refuerzan la influencia local de los grupos criminales. El consumo de drogas se ha vuelto más frecuente y asequible en muchas áreas urbanas de América Latina[107]. La venta local de drogas se ha convertido en una fuente importante de ingresos en México, y una parte de las ganancias de las pandillas vuelve a sus socios criminales más grandes, aunque el lucro tiende a ser menor en otros países[108]. Dado que dependen de una presencia física en torno a los puntos clave de venta, así como de la corrupción de la policía local, los mercados minoristas

[102] Entrevistas de Crisis Group, oficiales militares y de seguridad, Guayaquil, mayo de 2024.
[103] Este grupo es la Autodefensa Conquistadora de la Sierra Nevada, que mantiene un ala en la ciudad de Santa Marta. Entrevista de Crisis Group, funcionario colombiano con conocimiento de las conversaciones de paz, Bogotá, diciembre de 2024.
[104] Entrevistas de Crisis Group, miembros de la sociedad civil y expandilleros, Monterrey, febrero de 2023.
[105] Entrevista de Crisis Group, alto oficial militar, Guayaquil, mayo de 2024.
[106] Por ejemplo, reclamos por los repuntes de la violencia urbana en Bogotá y Barranquilla suelen movilizar tropas y recursos del Ministerio de Defensa de Colombia.
[107] Los precios también han caído en toda la región: una dosis de 1 gramo de cocaína (generalmente de baja calidad) cuesta entre $5 y $10 dólares en Guayaquil, $5 en Medellín, $20 en Costa Rica y entre $19 y $25 en Guatemala. Entrevistas de Crisis Group, miembros de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas (LANPUD), junio de 2024.
[108] Entrevistas de Crisis Group, agentes de seguridad locales, líderes locales y periodistas, Colima y Baja California, marzo-abril de 2024.

de drogas también consolidan la influencia criminal en determinadas zonas. Los grupos criminales más grandes de México designan o aprueban la selección de "jefes de plaza", cabecillas locales de grupos más pequeños, en quienes confían para gestionar las ventas[109]. También se sabe que los vendedores expanden su mercado a la fuerza. Los supervisores de granjas en México son presionados por las pandillas locales para que promuevan el consumo de metanfetamina entre sus empleados, y los clubes nocturnos y las trabajadoras sexuales se ven obligadas a vender una cierta cantidad de droga cada noche[110].

Los traficantes suelen pagar a las bandas urbanas con drogas, armas y entrenamiento militar, herramientas que luego utilizan para crear nuevas fuentes de ingresos e imponer un control coercitivo. El terror armado se convierte en su motor económico. Con la bendición de sus aliados más grandes, las pandillas se vuelven contra la población para generar ingresos, sobre todo a través de la extorsión (ver más en la Sección IV.D). Es comprensible que, en muchos países latinoamericanos, estas bandas locales son la parte del aparato del narcotráfico que provoca la mayor indignación de los ciudadanos.

[109] Entrevistas de Crisis Group, agentes de seguridad locales, excandidato a la alcaldía, líderes locales, periodista, Colima y Baja California, marzo-abril de 2024.
[110] Entrevistas de Crisis Group, periodista y dirigente sindical, Colima, abril de 2024.

IV. **Violencia**

El crimen organizado transnacional se aprovecha de las necesidades y vulnerabilidades de las comunidades y prospera gracias a ellas. Aunque los altos niveles de desigualdad y las inadecuadas redes de protección social existían en casi todos los países latinoamericanos antes de que el COVID-19 llegara, la pandemia agravó estos problemas, frenó los avances regionales en reducción de pobreza y potenció la capacidad del crimen organizado para captar nuevos reclutas y territorios[111]. Las dificultades de la vida urbana, la pobreza rural y la disponibilidad de jóvenes que abandonaron la escuela o carecen de oportunidades laborales abonaron el terreno para la más reciente expansión geográfica de las organizaciones criminales[112]. Los grupos de narcotraficantes se han aprovechado de la desesperación y de la insuficiencia de servicios estatales para imponer sus propias formas de empleo y gobernanza. Una vez establecido, el control criminal empobrece y amenaza aún más a la mayoría de la población, que además teme por su vida.

La violencia, al igual que las ganancias, no se distribuye de manera uniforme en el mercado de drogas y tiende a concentrarse en focos muy delimitados, a menudo en lugares donde varios grupos se enfrentan por el territorio. A pesar de una caída a nivel nacional de los homicidios en Colombia en 2023, la pequeña ciudad de Sincelejo, en el norte del país, se convirtió en uno de los lugares más violentos del mundo como resultado de una guerra territorial urbana[113]. Además, la violencia no sólo se distribuye de manera desigual dentro de las fronteras nacionales, sino que sigue trayectorias diferentes de un país a otro. Mientras que Ecuador y Costa Rica están experimentando cifras récord de homicidios, los índices de violencia en México parecen haberse estabilizado, aunque a un nivel elevado. En Argentina, Colombia, El Salvador y Guatemala, por su parte, los índices de violencia letal se sitúan muy por debajo de los máximos registrados en las últimas décadas[114]. El fin del conflicto armado (en el caso de Colombia), los cambios en las condiciones económicas, las nuevas oportunidades lícitas o ilícitas de obtener ganancias, los esfuerzos por reformar y fortalecer los sistemas de seguridad y judicial e incluso la suerte parecen desempeñar un papel crucial a la hora de determinar las tendencias de violencia en cada país[115].

[111] Una contracción económica regional del 6,7 por ciento en 2020 paralizó e incluso socavó los esfuerzos para reducir la pobreza multidimensional. Ver "Mapping the Socioeconomic Consequences of COVID-19 in Latin America and the Caribbean and the Adopted Responses for Recovery", PNUD, 2 de junio de 2023.

[112] "América Latina lucha contra una nueva ola de criminalidad", comentario de Crisis Group, 12 de mayo de 2023.

[113] "La guerra urbana que llevó a Sincelejo a ser una de las ciudades más peligrosas del mundo en 2023", *El País,* 15 de abril de 2024.

[114] Informe de Crisis Group sobre América Latina N°106, *El laberinto de los generales: crimen y militares en México,* 24 de mayo de 2024. Ver también, "Costa Rica's homicide rate rises in deadliest year ever", Reuters*,* 22 de septiembre de 2023; "Disminuyeron los asesinatos y la tasa de homicidios es una de las más bajas de la región", *La Nación*, 12 de enero de 2025; "Balance de InSight Crime de los homicidios en 2024", *Insight Crime,* 26 de febrero de 2025.

[115] Ver por ejemplo "Homicide and Organized Crime in Latin America and the Caribbean", UNODC, 2023, e informe de Crisis Group sobre América Latina N°70, *Rescatando la lucha de Guatemala contra el crimen y la impunidad*, 24 de octubre de 2018.

Las operaciones de las fuerzas de seguridad y sus efectos a menudo imprevistos también juegan un papel decisivo en la reconfiguración de la violencia. Cuando las autoridades restringen una parte de una ruta, los criminales desplazan las operaciones delictivas a zonas que ofrecen posibilidades, ya sean centros de exportación comercial, comunidades vulnerables o funcionarios estatales susceptibles a la corrupción. Este "efecto globo" ha sido una característica de larga data de las políticas antidrogas del lado de la oferta: la erradicación de los cultivos de coca en Colombia, por ejemplo, simplemente llevó a los productores a trasladarse a otros departamentos o países, como si jugaran rayuela[116]. Los traficantes también se han ido desplazando de los puertos colombianos, relativamente más vigilados, a los de Ecuador, donde hay menos supervisión. Algunas partes de Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay y Paraguay están entre los lugares que ahora absorben el desborde de actividad criminal a medida que cambian las rutas[117].

Frente a estas tendencias más amplias, la decisión de los grupos criminales de emplear distintos tipos de violencia puede entenderse como una decisión estratégica, orquestada con intenciones concretas. Los grupos pueden utilizar la violencia para coaccionar a los políticos y penetrar en el Estado, extraer rentas de la población local o asegurarse el control de las rutas de tráfico y zonas de distribución. Las comunidades locales suelen ser las más afectadas. Dada la configuración en red del narcotráfico en América Latina, esto no es casualidad. Las oportunidades de lucro, la intensificación de la competencia para entrar en la cadena de suministro y el amplio acceso a armas de fuego han conspirado para hacer de la coerción criminal una característica de la vida cotidiana para muchas de las personas más empobrecidas de la región.

A. *Plata o plomo*

La corrupción y la cooptación son las estrategias que los grupos criminales eligen para penetrar en los Estados y las instituciones con el fin de obtener protección, impunidad y oportunidades de lucro. En el caso de los delitos relacionados con las drogas, la captura del Estado es un elemento esencial para hacer negocios, pues garantiza que todas las etapas de la cadena logística se desarrollen con un riesgo limitado de incautaciones o arrestos. Los grupos criminales se sienten más cómodos cuando "manejan a su antojo a jueces, fiscales", dijo un residente de una comunidad afectada por la violencia en Honduras, donde los traficantes buscan corromper a "policías y militares, quienes ya sabían cuándo iban a pasar y ponían su gente para decirles, hoy va a pasar fulano, así que no lo paren"[118].

La violencia suele ser el plan B cuando los sobornos no garantizan el cumplimiento, o si los grupos rivales también tienen a su servicio a los mismos funcionarios estatales o políticos electos. A menudo, los criminales presentan a los funcionarios estatales la alternativa de plata o plomo: o aceptan los sobornos o pagan el precio con sus propias

[116] Leonardo Raffo López, Javier Andrés Castro, y Alexander Díaz España, "Los efectos globo en los cultivos de coca en la Región Andina (1990-2009)", *Apuntes del Cenes*, vol. 35, no. 61 (2016).
[117] La ciudad portuaria de Rosario, Argentina, ha experimentado un aumento en los homicidios en los últimos años, a pesar de una disminución a nivel nacional, "Homicide and Organized Crime in Latin America and the Caribbean", op. cit.
[118] Entrevistas de Crisis Group, residentes de Colón, mayo de 2024.

vidas o las de sus familiares. Algunos funcionarios aceptan de buen grado el dinero de los delincuentes, asumiendo el servicio público como una fuente de enriquecimiento ilícito o financiamiento de partidos, y se muestran dispuestos a participar o incluso a unirse a grupos criminales. Las difusas líneas que separan a los funcionarios del Estado de los grupos ilegales plantean uno de los mayores desafíos a la hora de mitigar las amenazas criminales.

México es ahora el caso emblemático de corrupción y cooptación por parte del crimen organizado en América Latina. Casos judiciales e informes de medios de comunicación indican que los criminales han captado efectivamente partes de las fuerzas de seguridad, así como a jueces, fiscales, políticos y otros funcionarios estatales, resultando en oficinas enteras en algunas instituciones que están al servicio de los intereses criminales[119]. Investigaciones de Crisis Group han demostrado que los grupos armados a menudo tratan de evitar las operaciones de seguridad reduciendo las formas más visibles de violencia, al tiempo que se aseguran de que los agentes pertinentes y sus superiores sean sobornados. Sin embargo, con una infinidad de grupos criminales compitiendo por controlar a los funcionarios estatales, esto no ha demostrado ser un medio eficaz para frenar la creciente oleada de asesinatos de alcaldes y concejales, que sigue creciendo[120].

Las elecciones mexicanas en 2024 mostraron una vez más cómo los grupos criminales compiten entre sí para apoderarse de codiciados cargos estatales y atacan a los candidatos que se niegan a protegerlos o se cree que trabajan para grupos rivales. Al menos 130 candidatos a cargos públicos fueron atacados y 32 asesinados en el período previo a las elecciones de junio de 2024, que resultaron ser las más violentas en la historia del país[121]. Incluso antes del ciclo electoral, este tipo de ataques a candidatos o funcionarios públicos se habían vuelto cada vez más frecuentes y aumentaron más del 200 por ciento entre 2018 y 2023[122]. La decapitación del recién elegido alcalde de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, días después de asumir el cargo en octubre de 2024, demostró el alcance del control criminal sobre gran parte del estado. El nuevo alcalde se había comprometido a no forjar pactos con grupos ile-

[119] Aunque la corrupción y la colusión se extienden a la mayoría de los niveles del Estado mexicano, el crimen organizado tiene su base social en los municipios y la violencia política se concentra principalmente en el nivel local. Ver informe de Crisis Group sobre América Latina N°99, *México y sus alcaldes olvidados: gobierno local y la lucha contra el crimen*, 23 de junio de 2023.

[120] Ibid., e informe de Crisis Group, *El laberinto de los generales: crimen y militares en México,* op. cit. Entre 2004 y 2018 fueron asesinados 178 alcaldes, exalcaldes, alcaldes electos y alcaldes suplentes. Ver David Pérez Esparza y Helden De Paz Mancera, "Mayoral homicide in Mexico: A situational analysis on the victims, perpetrators, and locations of attacks", Rice University's Baker Institute for Public Policy, junio de 2018.

[121] Falko Ernst, "México vota: ¿qué pasará con la seguridad y las relaciones con EE. UU.?", comentario de Crisis, 28 de mayo de 2024; "Violencia en elecciones de 2024 superó la de 2018 y 2021", comunicado de prensa, Data Cívica, 2 de julio de 2024. Integralia contabilizó 39 candidatos o precandidatos asesinados en el mismo periodo preelectoral de septiembre de 2023 a junio de 2024. "Reporte final de violencia política: Balance poselectoral 2023-2024", Integralia Consultores, 8 de julio de 2024.

[122] Los índices de violencia política aumentaron un 237 por ciento entre 2018 y 2023, "Primer reporte de violencia política: Mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales, 2024", Integralia Consultores, febrero de 2024.

gales, a diferencia de su predecesora, quien había sido grabada reuniéndose con sus líderes[123].

Países que hasta hace poco parecían pacíficos ahora encaran una experiencia similar al enfrentarse a las amenazas de corrupción y violencia que plantean los grupos criminales. El caso judicial conocido como Metástasis en Ecuador reveló la magnitud de la penetración en el Estado por parte de los grupos criminales del país, los tribunales condenaron a 32 personas, entre ellas jueces, fiscales y altos funcionarios de los servicios de seguridad, por cargos de colusión con el crimen organizado[124].

Cuando fracasa la connivencia con las autoridades, los atentados de alto impacto, como el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, pueden servir para enviar un mensaje político intimidatorio. El 7 de enero de 2024, las autoridades penitenciarias se dieron cuenta de que José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder del grupo criminal ecuatoriano Los Choneros, se había fugado de la cárcel. El presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción y señaló que el Estado intentaría retomar el control de las cárceles del país al día siguiente[125]. La respuesta de los grupos criminales no se hizo esperar. El 9 de enero, hombres armados irrumpieron en un estudio de televisión en Guayaquil que emitía en directo, estallaron motines en varias cárceles y delincuentes armados paralizaron la ciudad. "Salieron a las calles todas las bandas juntas, en avenidas principales. Fueron días de terror", recordó un residente[126]. Aunque el presidente Noboa adoptó medidas aún más duras tras el suceso, el caos demostró la capacidad de los grupos criminales para alterar el orden público y su voluntad de contrarrestar cualquier intento del recién elegido gobierno por implementar medidas de seguridad o reformar las prisiones[127].

B. *Control territorial*

La competencia entre grupos locales que pelean por un lugar en la cadena del narcotráfico es feroz, y una de las formas de garantizar su lugar (e incluso ascender en la jerarquía) es controlar el territorio. Las feroces guerras territoriales en las ciudades y zonas rurales que imponen un alto precio a la población local no son exclusivas de los grupos involucrados en el narcotráfico. Las altísimas tasas de homicidio en Hon-

[123] "Detienen al encargado de la Seguridad de Chilpancingo por el homicidio del alcalde", *Proceso,* 12 de noviembre de 2024; "La alcaldesa de Chilpancingo se reúne con el líder de un grupo criminal en Guerrero", *El País,* 5 de julio de 2023.

[124] La investigación por el asesinato en prisión del narcotraficante Leandro Norero, ocurrido en 2022, dio origen a una amplia investigación conocida como Metástasis, que demostró que una red de funcionarios corruptos financiados por Norero alcanzaba casi las más altas esferas del poder, y destapó un plan para garantizar la impunidad de los sospechosos procesados. "Un megaoperativo en Ecuador revela la profundidad de la narcopolítica en el sistema judicial", *El País,* 16 de diciembre de 2023.

[125] Glaeldys González Calanche, "¿Puede una guerra contra el crimen traer alivio a Ecuador?", comentario de Crisis Group, 19 de enero de 2024.

[126] Entrevista de Crisis Group, Guayaquil, mayo de 2024.

[127] Después de que Quito ordenara a los militares asumir el control del sistema penitenciario, la sociedad civil local y expresidiarios dijeron que, pese a las mejoras iniciales en la vida carcelaria, los soldados pueden haber caído en patrones de connivencia similares a los de los guardias anteriores. Entrevistas de Crisis Group, Guayaquil, mayo de 2024. Ver también, González, "¿Puede una guerra contra el crimen traer alivio a Ecuador?", op cit.

duras y El Salvador entre 2010 y 2016 se debieron en gran medida a la rivalidad entre pandillas, con una participación muy limitada del narcotráfico internacional[128]. Dicho esto, los actuales epicentros de violencia letal en América Latina coinciden en gran medida con los centros de las rutas de suministro de drogas. Además, los traficantes a veces exacerban estos enfrentamientos por territorio invirtiendo en un grupo en lugar de otro, u ordenando a sus proveedores locales de drogas que capturen determinada ruta de un grupo rival[129]. Los grandes grupos criminales nacionales pueden actuar de manera similar, proporcionando armas o capital a las pandillas y fomentando enfrentamientos entre ellas[130].

Las líneas de batalla entre rivales locales pueden ser al mismo tiempo invisibles y absurdamente precisas. Una persona puede ser etiquetada como leal al grupo armado dominante del sector en el que vive y, al cruzar una frontera invisible hacia otra zona, corre el riesgo de ser asesinada. Un líder juvenil de Guayaquil explicó: "En un sector de 25 bloques, cada bloque tiene dos o tres bandas. Dividen los barrios. … Mi hermano era del bloque cuatro, y entró a una fiesta en el bloque tres. Lo mataron 'porque él no podía estar en este sector'"[131]. En Zacapa, sureste de Guatemala, una mujer que vendía billetes de lotería fue desaparecida, según los vecinos, probablemente por haber cruzado una frontera invisible para vender en una zona controlada por pandillas[132].

La inviolabilidad de las fronteras no perdona a nadie, incluidos los niños. Los menores que viven en zonas controladas por una pandilla no pueden asistir a clases si su escuela está en una zona controlada por otra banda[133]. Esta lógica se arraiga profundamente desde una edad temprana: "Los jóvenes a partir de los siete u ocho años dicen que mejor no ir a tal lugar", dijo un líder juvenil de la ciudad colombiana de Buenaventura[134]. El crimen permea muchas interacciones cotidianas. Otro residente de Buenaventura recordó que cuando los niños se reúnen para jugar, se divi-

[128] Informe de Crisis Group, *El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en Centroamérica,* op. cit.

[129] Según informes, los Carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han invertido en impulsar a sus proveedores en Ecuador, Los Choneros y Los Lobos, respectivamente, con el fin de ganar territorio frente a su rival. Entrevistas de Crisis Group, expandilleros, Guayaquil, mayo de 2024. Presuntamente, en la zona rural de Chocó, Colombia, el Ejército Gaitanista, también conocido como el Clan del Golfo, recibió una solicitud de sus clientes internacionales, el Cartel de Sinaloa, para consolidar el control sobre un río al norte de Buenaventura a finales de 2023, expulsando así a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de la zona. Entrevistas de Crisis Group, líder juvenil y mujer líder de la zona afectada, Buenaventura, enero de 2024.

[130] En México, los grupos criminales más grandes han invertido armas y entrenamiento en sus aliados locales, quienes les ayudan a aferrarse al control. Entrevistas de Crisis Group, funcionarios de seguridad nacionales y locales, funcionarios de la SEDENA, periodistas y líderes locales, Colima, Ciudad de México y Baja California, marzo-mayo de 2024.

[131] Entrevista de Crisis Group, Guayaquil, mayo de 2024. Ver también "Durán, una ventana a la explosión del crimen organizado en ecuador", Insight Crime, 26 de septiembre de 2024.

[132] Entrevista de Crisis Group, miembro del comité de desarrollo local, Zacapa, junio de 2024.

[133] Consciente de estos riesgos, el gobierno ecuatoriano permite clases virtuales como alternativa para los padres preocupados por la seguridad, "Ecuador va a clases virtuales en zonas de alta criminalidad", *Deutsche Welle,* 25 de septiembre de 2023.

[134] Entrevista de Crisis Group, líder juvenil, Buenaventura, enero de 2024.

den en dos grupos que pretenden ser miembros de los Shottas o los Espartanos, los dos principales grupos delictivos de la ciudad[135].

Las niñas y mujeres suelen ser tratadas como propiedad del grupo que controla la zona donde viven. Aquellas que cruzan las fronteras invisibles para socializar o tener una cita pueden ser castigadas de forma violenta para dar ejemplo a las demás. Un residente de Guayaquil explicó: "Dicen que esa mujer 'pertenece' a la banda. No puede tener novio de otro sector. El año pasado, mataron a dos niñas quienes salían de una fiesta en otro sector. [Los criminales] las esperaron hasta que salieron, y fue una cacería, mataron a las dos. Enviaron un mensaje a todo el sector, que no queremos ver a ninguna otra con hombres del otro sector"[136]. Estos grupos también pueden utilizar los feminicidios para marcar territorio; las pandillas también amenazan o asesinan a las novias de miembros de grupos rivales como forma de presión[137]. El tráfico de niñas y mujeres se ha extendido en muchas zonas; en el estado mexicano de Baja California, por ejemplo, esta actividad está controlada por los mismos grupos involucrados en el narcotráfico[138].

Los criminales también se disputan ferozmente el control territorial en las zonas rurales. En Honduras, por ejemplo, algunos grupos desplazan por la fuerza a la población local para consolidar nuevas rutas y territorios dedicados al narcotráfico y para proteger sus activos. Una joven residente del departamento de Colón contó cómo un grupo armado ejerció una presión cada vez mayor sobre la familia de sus vecinos para expulsarlos de sus tierras de cultivo. Primero, hombres armados destruyeron sus cultivos y luego regresaron a saquear la propiedad[139]. Otros habitantes del departamento de Colón describieron cómo destruyeron pistas clandestinas para el tráfico de drogas y luego fueron desplazados por los grupos criminales que las construyeron. Las élites económicas de la zona "utilizan esas tierras para el tema de la narcoactividad y protegen esas áreas a través de los grupos criminales", dijeron los residentes[140].

Los residentes que viven a la sombra de poderosos grupos criminales que operan en el narcotráfico también son castigados por transgredir otras reglas tácitas o por denunciar delitos a las autoridades. Acusaciones tan aparentemente frívolas como ser chismoso son castigadas con la muerte en medio de disputas entre bandas locales de narcotraficantes en la ciudad portuaria mexicana de Manzanillo, mientras que en algunas zonas de Colombia se sancionan con una multa[141]. Vender drogas a un adversario o traficar con drogas de una fuente rival también acarrean violentos casti-

[135] Entrevista de Crisis Group, promotor de liderazgo juvenil, Buenaventura, enero de 2024.
[136] Entrevista de Crisis Group, líder juvenil, Guayaquil, mayo de 2024.
[137] Entrevista de Crisis Group, mujer periodista, Guayaquil, mayo de 2024; informe breve de Crisis Group, *Un problema de tres fronteras: detener la criminalidad en la Amazonía*, op. cit.
[138] Aunque algunas de estas mujeres luego son traficadas hacia el norte, a EE. UU., otras se quedan en Tijuana, donde el grupo local dominante les impone un recargo por su lugar de trabajo, así como por cada servicio prestado. Entrevistas de Crisis Group, periodistas locales y miembros de los colectivos de buscadoras, Baja California, abril de 2024. Funcionarios humanitarios en Colombia reportan patrones similares de niñas reclutadas u obligadas a realizar trabajos sexuales por órdenes de los grupos armados. Entrevistas de Crisis Group, 2023 y 2024.
[139] Entrevista de Crisis Group, mujer joven, Trujillo, Colón, mayo de 2024.
[140] Entrevistas de Crisis Group, residentes de Tocóa, Colón, mayo de 2024.
[141] Entrevista de Crisis Group, fiscal, Colima, abril de 2024; informe de Crisis Group, *La incógnita de la "paz total": qué hacer con los gaitanistas,* op. cit.

gos[142]. Las acusaciones de proporcionar información a las fuerzas de seguridad o a un grupo enemigo "no se perdonan", explicó un clérigo de Putumayo, Colombia, sobre el código tácito de los grupos armados[143]. Las normas y los castigos que se imponen responden arbitrariamente a la personalidad y disposición del jefe local, que tiene el poder de detener o ejercer la violencia a su antojo. Muchos utilizan su posición para vengarse de agravios personales o ejecutar ajustes de cuentas[144].

C. *Reclutamiento*

El incesante reclutamiento de niños y jóvenes por parte de grupos criminales es un desafío de enormes proporciones para los Estados y las fuerzas de seguridad que intentan debilitar el control del narcotráfico. El crimen organizado transnacional se aprovecha de un flujo constante de reclutas prescindibles, que se ven atraídos por estos grupos en busca de ingresos y estatus, y, según palabras de una persona que abandono un grupo armado, con la esperanza de que "si logran llegar a los 25 años, pueden volverse comandantes"[145]. En algunas de las zonas más afectadas por la delincuencia, generaciones enteras de jóvenes han sido absorbidas por medios de vida ilegales que serán difíciles de reemplazar con alternativas lícitas. Los grupos criminales se presentan como una oportunidad para los jóvenes; en muchos lugares, trabajar para ellos se considera "como un empleo cualquiera"[146].

La forma en la que se ha glamorizado el derroche y la vida delictiva a través de plataformas de redes sociales como TikTok, así como en la música popular, atrae a los jóvenes que buscan tener cierto poder en comunidades donde saben que hay muy poco espacio para la movilidad social[147]. Como explicó un miembro de una comunidad en Honduras, "los narcos y las bandas criminales, les muestran un camino diferente para poder tener dinero y poder, con lo cual los convencen para formar parte de sus estructuras"[148].

En estos contextos, la línea divisoria entre el reclutamiento forzoso y el ingreso voluntario es difusa, en particular cuando se trata de mujeres y niñas. Una madre de la ciudad colombiana de Buenaventura relató una situación habitual: un hombre conocido por ser parte de un grupo criminal llega a una casa y dice que quiere llevarse a una niña de la familia, a menudo de tan sólo nueve o diez años. Si los padres se

[142] Entrevista de Crisis Group, funcionario de seguridad, Colima, abril de 2024.
[143] Entrevista de Crisis Group, Mocoa, febrero de 2024.
[144] Entrevista de Crisis Group, líder local, Colima, abril de 2024.
[145] Entrevista de Crisis Group, expandillero, Guayaquil, mayo de 2024.
[146] Entrevista de Crisis Group, asesor del gobierno local, Petén, junio de 2024.
[147] En las zonas rurales de Colombia, "reclutan a estos niños atraídos por cierto estilo de vida: ser poderosos, portar armas", explicó un líder comunitario afrocolombiano. Entrevista de Crisis Group, Jamundí, octubre de 2022. Entrevistas de Crisis Group, residentes y expandilleros, Guayaquil, mayo de 2024.
[148] Entrevista de Crisis Group, residente, Tocoa, Colón, mayo de 2024. Un residente de Baja California, México, dijo a Crisis Group: "Ahora la mayoría de los muchachos sí quieren pertenecer a esos grupos ... vienen estos fulanos con sus camionetas, con sus cuernos [armas] y los muchachos quedan maravillados. Así los reclutan. En otros casos le entran porque se endeudan y terminan trabajando de sicarios. En muchos casos ni entrenamiento les dan, porque los ves que ni saben cargar el arma, son carne de cañón". Entrevista de Crisis Group, Baja California, abril de 2024.

oponen, la familia recibe amenazas[149]. El intento de reclutamiento de menores es, de hecho, una causa común de desplazamiento forzado[150]. En otros casos, las familias alientan a sus hijas jóvenes a mantener relaciones con miembros de bandas como una forma de conseguir sustento económico. Los grupos criminales también identifican a las mujeres cabeza de familia, y las presionan para que se unan al grupo o entablen una relación con un integrante para poder mantenerse a sí mismas y a sus hijos[151].

Una vez dentro de las filas de estos grupos, los menores se dan cuenta de que la situación es menos glamorosa de lo que esperaban. Los soldados rasos a menudo reciben apenas lo suficiente para sobrevivir. Un exintegrante explicó: "Las filas no reciben nada. … sólo les queda dinero para tomar [alcohol] y les pagan en armas"[152]. El hecho de que haya un gran número de jóvenes sin entrenamiento portando armas pesadas plantea un riesgo constante de escalada violenta, explicó un expandillero en Ecuador. Los desacuerdos que en el pasado podrían haber desembocado en peleas a puños hoy se han convertido en tiroteos masivos: "Las masacres son hechas por chicos incompetentes sin preparación. No miden la magnitud de lo [los crímenes] que han cometido"[153].

D. *Extorsión*

A medida que se ha fortalecido el control criminal sobre el territorio, la extorsión se ha convertido en una fuente importante tanto de ingresos ilícitos como de violencia contra quienes no pueden o no quieren pagar. Exigir dinero a cambio de una supuesta protección, generalmente frente a delitos menores y amenazas que plantean los mismos grupos ilegales, no es algo nuevo en la región[154]. Pero su marcado crecimiento en los últimos años se debe en gran medida a que el narcotráfico ha empoderado y dotado de armas a grupos locales depredadores. La extorsión ahora afecta a millones de personas en América Latina[155]. Para las organizaciones criminales más grandes, la

[149] Entrevista de Crisis Group, Buenaventura, febrero de 2024.

[150] Las familias entrevistadas por Crisis Group hablaron de tener que mudarse a menudo dentro de la ciudad (en Guayaquil), a lo largo del país (en Colombia) o al exterior (en Honduras). Entrevistas de Crisis Group, líder juvenil, Guayaquil, mayo de 2024; residentes, Tocoa y Trujillo, Colón, mayo de 2024.

[151] En Colombia, por ejemplo, cerca de la mitad de todos los hogares están encabezados por mujeres, ver "Casi la mitad de las familias en Colombia tiene una mujer como la cabeza del hogar", *La República,* 25 de abril de 2024. Ver también el informe de Crisis Group sobre América Latina N°98, *Proteger a los colombianos más vulnerables en el camino hacia la "paz total",* 24 de febrero de 2023.

[152] Entrevista de Crisis Group, Guayaquil, mayo de 2024.

[153] Ibid.

[154] En Centroamérica, las empresas de transporte han sido víctimas durante mucho tiempo de violentas extorsiones por parte de pandillas. Según instituciones nacionales de derechos humanos en Guatemala y Honduras, más de 5000 conductores de autobús o taxi fueron asesinados entre 2010 y 2024, en muchos casos, como castigo por no pagar una extorsión, "Choferes de Honduras y Guatemala, asediados entre el pago de las extorsiones o la muerte", EFE, 28 de septiembre de 2024.

[155] La extorsión es un delito muy difícil de medir, ya que muchas víctimas no lo denuncian por miedo a represalias. Sin embargo, los estudios existentes indican un aumento dramático, Eduardo Moncada, *Resisting Extortion* (Oxford, 2022). El secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de México, Omar García Harfuch, señaló a la extorsión como un delito de alto impacto que, junto con el homicidio, será el eje de la nueva política de seguridad del gobierno. "Conferencia de prensa de la

extorsión es una importante fuente de ingresos, así como una manera de imponer su control sobre la población. Para los residentes, es una forma violenta de gobernanza, cuyo incumplimiento se traduce en ataques, desplazamientos forzosos o secuestros. La extorsión también está estrechamente relacionada con la reconfiguración del crimen, ya que se permite y alienta a los grupos de menor nivel, especialmente pandillas urbanas, a generar sus propios ingresos independientemente del tráfico de drogas.

El vertiginoso crecimiento del negocio de la extorsión lo ha convertido en un importante problema de seguridad. En Ecuador, el 90 por ciento de los empresarios dijo que la extorsión era la principal, mientras que el 70 por ciento de las víctimas evita denunciar el delito por la falta de confianza en las instituciones estatales[156]. Los casos de extorsión denunciados a las autoridades aumentaron un 40 por ciento en Colombia en el primer trimestre de 2023, y luego otro 27 por ciento en 2024; estudios indican que es probable que el número real de casos sea mayor[157]. Los grupos encargados del negocio de la protección criminal coaccionan, amenazan y vigilan a la población local[158]. La guerrilla del ELN en Colombia, por ejemplo, secuestra sistemáticamente a quienes se niegan a pagar las extorsiones[159]. Al mismo tiempo, la competencia entre grupos criminales puede dar lugar a enfrentamientos directos, a menudo en barrios densamente poblados, o simplemente a que los pobladores se vean obligados a realizar varios pagos a distintos grupos criminales, con efectos devastadores[160].

Las empresas son objetivos lucrativos para los grupos criminales y muchos propietarios se ven obligados a pagar, enfrentarse al cierre o ser asesinados[161]. "Si no pagan les queman el local por lo que muchos comerciantes pagan o cierran definitivamente el negocio", dijo un dirigente sindical de la ciudad mexicana de Colima[162]. También se aprovechan de los más pobres. Los pequeños comercios y quioscos locales son objetivos frecuentes, al igual que los inmigrantes que pasan por México[163]. Los grupos

presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 8 de octubre de 2024", Presidencia de México, 8 de octubre de 2024.

[156] "Radiografía de la Extorsión: Tipologías y resultado de la Encuesta Nacional de Victimización de Casos de Extorsión Empresarial", Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2024.

[157] "Extorsión se disparó en 2024: estos son los departamentos más afectados", RCN Noticias, 21 de agosto de 2024; Crisis Group vio un documento clasificado que tiene estas estadísticas en abril de 2023. Sobre el subregistro, ver "La extorsión y su subreporte: datos de una encuesta en Quibdó", *El Espectador,* 20 de marzo de 2024.

[158] Entrevista de Crisis Group, residentes, San Pablo, mayo de 2023.

[159] Los vínculos entre el secuestro y la extorsión se hicieron evidentes en 2024, cuando los negociadores de paz del gobierno colombiano pidieron al ELN que dejara de secuestrar. El grupo dijo que necesitaría un incentivo económico para hacerlo, ya que la amenaza del secuestro era esencial para obligar a los pobladores a pagar. Entrevistas de Crisis Group, observadores internacionales de las conversaciones, febrero y marzo de 2024. Otros grupos armados han utilizado la violencia sexual contra mujeres y personas LGBTQI+ que no pagan.

[160] Residentes del sur de Bolívar, Colombia, denuncian que tienen que pagar extorsiones hasta a cinco grupos diferentes cada mes. Entrevistas de Crisis Group, líderes sociales y residentes, San Pablo, mayo de 2023.

[161] Los agricultores a gran escala de Colima pagan un monto fijo por mes, además de una suma por tonelada de producto transportada por camión. Entrevista de Crisis Group, dirigente sindical, Colima, abril de 2024.

[162] Entrevista de Crisis Group, dirigente sindical, Colima, abril de 2024.

[163] Por ejemplo, el dueño de una pequeña tienda en Colima que vendía accesorios para teléfonos celulares no pudo realizar el pago por protección a una pandilla local después de que ésta aumenta-

criminales cuyos ingresos por el narcotráfico han disminuido o han perdido relaciones importantes en la cadena de suministro recurren a la extorsión para suplir la falta de ingresos, como está ocurriendo en algunas zonas rurales de Colombia. En Guaviare, en el suroeste colombiano, el grupo criminal dominante conocido como Estado Mayor Central distribuyó recientemente encuestas entre los campesinos para calcular sus pagos mensuales en función, por ejemplo, de las cabezas de ganado que tienen, el tamaño de sus propiedades y otros ingresos[164]. Este grupo ha visto disminuir su negocio de tráfico de cocaína en los dos últimos años, dado que los compradores internacionales compran a otros proveedores.

E. *Prisiones*

El control de las prisiones se ha vuelto fundamental para las operaciones de los narcotraficantes, y las cárceles son ahora escenario de algunos de los actos de violencia más atroces de América Latina. Los líderes criminales "simplemente todos siguen trabajando" mientras están tras las rejas, explicó un narcotraficante convicto[165]. La corrupción del personal penitenciario es indispensable para convertir las cárceles en un "gran negocio" para todos los involucrados, en palabras de exreclusos[166]. Los guardias penitenciarios reciben comisiones por las tareas que realizan para los criminales reclusos, como comprar equipos, permitir el ingreso de drogas o adquirir alimentos especiales; un recluso en Colombia estimó que un guardia podría ganar aproximadamente ocho veces el salario mínimo a través de este sistema de pago por servicios[167]. El personal de mayor rango recibe salarios e incluso regalos de los grupos criminales. A cambio, los delincuentes siguen dirigiendo sus operaciones, usando teléfonos celulares, wifi y drones, y a menudo viviendo en condiciones opulentas en comparación con otros reclusos.

En la práctica, los reclusos mandan en muchas cárceles de la región. En Colombia y Ecuador, por ejemplo, los líderes criminales están "a cargo de todo", incluso de decidir qué presos pueden ingresar a sus áreas[168]. Otras bandas esencialmente han nacido en las cárceles, como el ahora famoso Tren de Aragua, que surgió de una cárcel venezolana y según funcionarios de seguridad ha extendido sus tentáculos por toda la región, aunque se enfoca en el tráfico de migrantes más que en el de drogas[169].

ra el precio mensual. Fue asesinado a tiros en la tienda una noche frente a su esposa y sus cuatro hijos. Entrevista de Crisis Group, viuda, Tijuana, noviembre de 2018. Ver también "Business Extortion and Public Security in Tijuana: who is protecting who?", México Evalúa, septiembre de 2022. Periodistas locales en Los Algodones dijeron que las sumas cobradas a los migrantes podían llegar a $5000 dólares, con penas de muerte si no podían pagarlas. Entrevistas de Crisis Group, abril de 2024. Ver también informe de Crisis Group sobre América Latina N°67, *Presa fácil: violencia criminal y migración en Centroamérica*, 28 de julio de 2016.

[164] Crisis Group vio esta encuesta enviada por WhatsApp. Entrevistas de Crisis Group, residentes rurales, San José del Guaviare, mayo de 2024.

[165] Entrevista de Crisis Group, Bogotá, abril de 2024.

[166] Entrevista de Crisis Group, exrecluso, Guayaquil, mayo de 2024.

[167] Entrevistas de Crisis Group, exreclusos de Colombia y Ecuador, abril y mayo de 2024.

[168] Entrevista de Crisis Group, narcotraficante convicto, Bogotá, abril de 2024.

[169] Ver por ejemplo "El caso del Tren de Aragua: tráfico de migrantes y transnacionalización del crimen organizado", *Periódico UNAL*, 22 de noviembre de 2024; Ronna Rísquez, *El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina,* (Caracas, 2023).

En Guayaquil, el control criminal es tan completo que las autoridades penitenciarias carecen de un censo exhaustivo de quiénes están en la cárcel, y mucho menos saben dónde se encuentran recluidos[170]. Poderosas bandas criminales dentro de las cárceles ecuatorianas exigen pagos a los demás reclusos para asegurar un lugar donde dormir, comer e incluso para mantenerse con vida[171]. A menudo, las mujeres que están fuera de prisión terminan asumiendo esta carga económica, ya sea como madres, hermanas o parejas. En esencia, esto significa que estas mujeres asumen dos gastos de manutención: el de su hogar fuera de prisión y el de su pariente encarcelado[172].

Los motines son una muestra de la feroz codicia por el control de las prisiones. Brotes de violencia (que a menudo enfrentan a un grupo contra otro o como demostración de fuerza ante las autoridades) han acabado con la vida de cientos de reclusos en los últimos años en toda la región, incluidos muchos delincuentes menores ajenos al crimen organizado. Estos sucesos tienen un impacto aún mayor dado el dramático hacinamiento de las prisiones. La población carcelaria en toda de América Latina se ha duplicado en las últimas dos décadas, y en países como Ecuador se ha triplicado[173].

Por último, también hay pruebas contundentes de que los reclusos están detrás de redes de extorsión fuera de las cárceles. Un caso emblemático fue el de una red criminal en Guatemala que incluía hasta al director del sistema penitenciario[174]. Allí y en otros lugares, los pagos se obtienen a través de llamadas telefónicas directas a los objetivos o por medio de sus asociados en la calle[175].

[170] Entrevista de Crisis Group, expertos en seguridad y activista de derechos humanos, Guayaquil, mayo de 2024. En 2024, la UE concluyó un programa de dos años para apoyar la reforma carcelaria. Ver "La UE concluye asistencia a cárceles de Ecuador con reducción de hacinamiento y de muertes", EFE, 28 de agosto de 2024.

[171] Entrevistas de Crisis Group, exreclusos, Guayaquil, mayo de 2024.

[172] Entrevista de Crisis Group, periodista, Guayaquil, mayo de 2024; ver también "La crisis carcelaria en Ecuador también tiene rostro de mujer", *Indomita Media,* 7 de marzo de 2024.

[173] Estudios sugieren que la violencia en prisión es menos común cuando un sólo grupo criminal controla la cárcel. El costo es, sin embargo, que la organización logra establecer un control en gran medida sin restricciones. Bergman y Fondevila, *Prisons and Crime in Latin America*, op. cit.

[174] "Ligan a proceso a estructura criminal liderada por Byron Lima Oliva", comunicado de prensa, CICIG, 24 de septiembre de 2014.

[175] Entrevistas de Crisis Group, oficial de policía y exrecluso, Buenaventura y Bogotá, enero y abril de 2024.

V. Medidas clave para combatir la violencia

Aunque Washington presiona para intensificar la guerra contra las drogas, América Latina necesita nuevas opciones políticas para reducir las consecuencias violentas del narcotráfico y de los intentos por combatirlo. Décadas de esfuerzos para controlar la oferta han demostrado que, a pesar de los éxitos momentáneos, el flujo de drogas persiste, mientras que las intervenciones de mano dura alimentan nuevos y diferentes tipos de violencia. Como primer paso, los países consumidores (en particular en Norteamérica y Europa) deben reconocer la creciente brecha entre las prioridades de sus capitales, que buscan sobre todo detener los envíos de drogas, y las de la región, que está desesperada por reducir la violencia. Trump parece dispuesto a usar el poder estadounidense para obligar a otros países a adoptar el enfoque que ha escogido, poniendo la lucha contra las drogas junto con la migración en el centro de su estrategia para América Latina. Pero si las políticas que prefieren los países consumidores no reducen la violencia, es probable que la oposición política y pública a ellas en América Latina se intensifique y pueda provocar una ruptura en la cooperación[176].

Un objetivo fundamental cuando se está abordando el problema del narcotráfico procedente de América Latina debe ser evitar que la situación de esta región empeore aún más. Los fracasos del pasado ofrecen amplia evidencia de que hay estrategias que generan más violencia, tales como las de capturas y extradiciones de alto nivel que decapitan a grupos criminales pero que son solo victorias fugaces que frecuentemente desatan feroces enfrentamientos. Los responsables de las políticas y las fuerzas de seguridad deben afrontar la incómoda realidad de que los avances a corto plazo en el debilitamiento de grupos criminales específicos a menudo resultan fortaleciendo las estructuras del narcotráfico ya que las organizaciones aprenden y se adaptan, se extienden a nuevas jurisdicciones o quedan bajo la dirección de nuevos y más despiadados líderes. La reducción de la violencia dependerá, en cambio, de una gama más amplia de intervenciones, que van desde la reforma del sector de seguridad, la provisión de medios de vida alternativos, el control de armas y, en ciertos casos, el diálogo con los grupos criminales.

Ninguna de las políticas sugeridas a continuación bastará por sí sola para acabar con la violencia relacionada con el narcotráfico. Tampoco es probable que la oferta y la demanda de drogas cesen en un futuro cercano. Pero cada una de estas medidas es necesaria para moderar la ola de violencia en América Latina y debe ser parte de un enfoque de múltiples niveles que combine una estrategia de seguridad compasiva y receptiva con esfuerzos serios para abordar las profundas necesidades de las comunidades de las que se aprovechan los grupos criminales.

[176] Aunque la mayoría de los países latinoamericanos se han mostrado reacios a enfrentarse abiertamente a EE. UU., ha habido excepciones. Desde 2008, Bolivia ha dejado de cooperar con los esfuerzos antinarcóticos estadounidenses tras expulsar a la DEA del país. Simeon Tegel, "Bolivia Ended Its Drug War by Kicking Out the DEA and Legalizing Coca", Pulitzer Center, 21 de septiembre de 2016. Más recientemente, varios gobiernos han emprendido lo que un analista denominó "una renuncia silenciosa a la guerra contra las drogas"; es decir, sencillamente dejar de cumplir con los requisitos de EE.UU. sin decir mucho. México y Colombia serían ejemplos de ello. Brian Winter, "Quiet Quitting the War on Drugs", *Americas Quarterly*, 18 de enero de 2024; "Del Castillo rechaza que la DEA opera en Bolivia y dice que no retornará mientras esté el actual Gobierno", *Los Tiempos*, 20 de diciembre de 2022.

A. *Seguridad y justicia*

1. Modernización institucional

Fortalecer y profesionalizar a las fuerzas de seguridad, las fiscalías y los sistemas judiciales sigue siendo una respuesta esencial a la amenaza del crimen organizado. La judicialización penal basada en pruebas sólidas es fundamental para disuadir a la delincuencia y garantizar justicia y protección para las víctimas. Varios Estados han logrado avances significativos en este sentido, por ejemplo, en la depuración de los fiscales, la optimización de sus capacidades de investigación y el fortalecimiento de los métodos jurídicos de los que disponen. La posibilidad de que los fiscales y jueces ofrezcan sentencias más leves a cambio de que los sospechosos describan detalladamente las actividades delictivas en las que estuvieron involucrados es posiblemente el avance más importante en la eficacia de los sistemas judiciales de América Latina en las últimas décadas[177].

Aun así, estos esfuerzos enfrentan grandes desafíos y reveses[178]. El número de procesos por delitos violentos que no terminan en una condena, que supera el 90 por ciento en el caso de los homicidios y es aún mayor en el caso de los feminicidios y la violencia sexual en toda la región, ilustra la magnitud de la impunidad judicial[179]. Muchos Estados tienen dificultades para abrir procesos por corrupción contra poderosas élites políticas o empresariales por temor a represalias u obstáculos legales. Como lo han hecho en los últimos años, los donantes internacionales pueden prestar un apoyo invaluable a los sistemas de justicia, incluso con conocimientos especializados, más personal y acceso a tecnologías para la investigación forense y financiera.

Mientras tanto, funcionarios públicos, como fiscales y jueces, necesitan una mayor protección física, desde protocolos de seguridad que puedan ser activados en caso de emergencia hasta protección armada. Los agentes de policía, por su parte, suelen estar armados, aunque siguen estando en inferioridad de condiciones. Las fuerzas de seguridad, por ejemplo, tendrán que implementar sistemas que permitan a los agentes denunciar rápidamente las amenazas, solicitar traslados o incluso tomar licencias de servicio hasta que los niveles de riesgo hayan disminuido. Los procesos penales de alto perfil contra delincuentes que atenten contra la policía también pueden servir para dejar claro que la seguridad de los agentes es una prioridad del Estado.

2. Un modelo diferente de intervención policial

Las duras medidas represivas contra la delincuencia, con El Salvador como el caso más reciente, han dejado una profunda huella en el imaginario popular de América

[177] Estas nuevas políticas se han basado en gran medida en los modelos de negociación de acuerdos y sentencias en EE. UU. y en la colaboración de los *pentiti* (los arrepentidos) en las investigaciones judiciales sobre la mafia italiana. Las innovaciones en este sentido fueron cruciales para el trabajo de la CICIG y permitieron ambiciosas investigaciones sobre la corrupción derivada de los sobornos pagados por el grupo constructor Odebrecht en Brasil.

[178] La reforma judicial mexicana, que pretende sustituir a todos sus jueces por magistrados electos, podría suponer un nuevo revés. "México: CIDH advierte posibles afectaciones en la independencia judicial, el acceso a la justicia y el Estado de Derecho frente a la aprobación de la reforma judicial", Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 12 de septiembre de 2024.

[179] "Comunicado: Solo 1 de cada 10 homicidios dolosos ha sido esclarecido en 6 años", Impunidad Cero, diciembre de 2022.

Latina. La campaña de detenciones masivas y encarcelamientos en condiciones humillantes del presidente Nayib Bukele, que comenzó en 2022, ha dado como resultado una marcada disminución de los homicidios[180]. Argentina y Ecuador son algunos de los países que han intentado emular este éxito, aunque con resultados variados. Sin embargo, la evidencia combinada de intervenciones similares en toda América Latina sugiere que las medidas represivas fuertemente militarizadas contra grupos criminales no reducen los homicidios a largo plazo, e incluso pueden aumentar la inseguridad[181]. No obstante, la actuación policial parece ser decisiva en los casos en que los Estados han logrado reducir la violencia. Estas experiencias ofrecen lecciones importantes sobre cómo utilizar las operaciones de seguridad para aflojar el control de los grupos criminales y reducir el daño que causan.

El atractivo del enfoque de Bukele radica en su tratamiento brutalmente directo de un problema que llevaba mucho tiempo sin encontrar solución, incluso si el costo en términos de violaciones a los derechos humanos y abusos de las normas democráticas es alto[182]. Por su parte, Ecuador ofrece un ejemplo de cómo los avances en materia de seguridad que se obtienen a través de una represión militarizada son casi imposibles de reproducir, y mucho menos de mantener. Tras un descenso inicial de la violencia después de que el presidente Daniel Noboa declarara el conflicto interno y desplegara las fuerzas armadas contra los grupos criminales en 2024, la violencia ha vuelto a aumentar bruscamente[183]. El hacinamiento penitenciario tiende a aumentar los índices de criminalidad en lugar de reducirlos, mientras que los grupos de narcotraficantes en particular pueden responder con mayor potencia de fuego y esfuerzos más decididos para corromper a los funcionarios públicos.

Las estrategias policiales que hacen énfasis en el despliegue de una presencia local permanente han tenido un éxito moderado. Las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), por ejemplo, se crearon en Río de Janeiro en 2008 para calmar violentos barrios de la ciudad. Más que eliminar el narcotráfico, la iniciativa buscaba socavar el control de los jefes de pandillas sobre la comunidad y restablecer la presencia estatal[184]. Media docena de estudios académicos encontraron evidencia sólida de que esta iniciativa ayudó a reducir los homicidios durante varios años después de su implementación[185]. Colombia ha empleado una metodología similar, conocida como

[180] La eficacia de la política de Bukele ha dependido en gran medida de su total concentración del poder, así como de las características específicas de las pandillas en El Salvador, que no están profundamente conectadas con el narcotráfico transnacional. Crisis Group, informe sobre América Latina N°96, Un remedio para la fiebre carcelaria en El Salvador, 5 de octubre de 2022. "World Report 2025", Human Rights Watch, enero de 2025.

[181] Ignacio Cano, Emiliano Rojido y Doriam Borges, "¿Qué funciona para reducir homicidios en América Latina y el Caribe? Una revisión sistemática de las evaluaciones de impacto", op. cit.

[182] Un diplomático europeo en la región explicó: "Tenemos un problema, y es que el modelo de Bukele pareció funcionar". Entrevista de Crisis Group, Santo Domingo, junio de 2024.

[183] Glaeldys González Calanche, "El recrudecimiento de la criminalidad ensombrece los comicios en Ecuador", comentario de Crisis Group, 6 de febrero de 2025.

[184] Elizabeth Leeds, "¿Qué se puede aprender del modelo de policía pacificadora de Brasil?", Washington Office for Latin America, 11 de marzo de 2016.

[185] Matthew Aaron Richmond, "The Pacification of Brazil's Urban Margins: Peripheral Urbanization and Dynamic Order-making", *Journal of the Academy of Social Sciences*, vol. 17 (2022). Beatriz Magaloni, Edgar Franco y Vanessa Melo, "Killing in the Slums: An Impact Evaluation of Police Reform in Rio de Janeiro", Stanford Center for International Development, (2015).

vigilancia comunitaria por cuadrantes, desde 2010[186]. Este modelo utiliza indicadores para identificar áreas particularmente problemáticas, donde se despliega policía adicional con el objetivo de responder a las preocupaciones de los residentes y resolver conflictos locales[187].

Una actividad policial más orientada a la comunidad puede ayudar a los Estados a recuperar parte de la legitimidad y el control territorial que han perdido a manos de los grupos criminales. Mientras soportan unas de las tasas de percepción de inseguridad más altas del mundo, los latinoamericanos desconfían profundamente de su policía, lo que dificulta las investigaciones criminales y alienta el sentimiento de que no existe una alternativa creíble al dominio criminal[188].

3. Considerar los efectos de las estrategias de seguridad

Por décadas, las estrategias de seguridad para combatir el narcotráfico se han centrado en medidas punitivas para detener el suministro de estupefacientes y desmantelar los grupos criminales. La administración Trump ahora está liderando una campaña para realizar capturas de alto nivel y ofensivas militarizadas contra los grupos criminales, a pesar de que hay abundante evidencia de que éstas no logran detener el flujo de narcóticos[189]. Ante la disyuntiva de cooperar con Washington o soportar elevados aranceles y otras sanciones económicas, muchos Estados latinoamericanos probablemente cedan a la presión. Pero la violencia resultante enfrenta cada vez más los intereses de los Estados con grandes mercados de consumidores de drogas y los de los países latinoamericanos. Si no hacen un mayor esfuerzo para anticipar y prevenir las repercusiones que las acompañan, es probable que las estrategias antinarcóticos de EE. UU. y Europa encuentren menos socios dispuestos a cooperar en la región.

EE. UU. también debe considerar más cuidadosamente sobre cuándo solicitar extradiciones. Actualmente, estos esfuerzos suelen estar orientados a asegurar condenas y obtener información sobre las rutas del narcotráfico, sin tener en cuenta la violencia que con frecuencia dejan a su paso. Las recientes solicitudes de que Colombia extradite a líderes de grupos que participan en negociaciones con Bogotá en el marco de la iniciativa de "paz total" del presidente Gustavo Petro demuestran que Washington sigue considerando la extradición como una pieza esencial de sus herramientas[190].

Mientras tanto, los llamados a una mayor cooperación internacional entre los Estados para combatir el crimen organizado se han vuelto tan comunes que suenan

[186] "Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes", Policía Nacional de Colombia, sin fecha.
[187] Lina Marmolejo, Nathalie Alvarado y Robert Muggah, "Por qué el Plan Cuadrante ayudó a reducir los homicidios en Colombia", Banco Interamericano de Desarrollo, 2016.
[188] "The Global Safety Report", Gallup, 2023. Los resultados de la encuesta revelaron que el 47 por ciento de los residentes de América Latina se sienten inseguros. Ecuador obtuvo la puntuación más baja de todos los países del mundo, con sólo un 27 por ciento de los encuestados que afirmaron sentirse seguros al salir a la calle por la noche.
[189] Vanda Felbab-Brown, "The new War on Drugs. Why the Fentanyl Crisis Requires a More Comprehensive Strategy Than Threats and Tariffs", *Foreign Affairs*, 17 de febrero de 2025.
[190] "La detención de 'Araña' en plena negociación suma otra incertidumbre a la paz total de Petro", *El País*, 13 de febrero de 2025.

trillados. Pero la falta de intercambio de información adecuada y de coordinación de estrategias nacionales ayuda a que los narcotraficantes puedan establecer nuevas rutas e ingresen a nuevas jurisdicciones con relativa facilidad[191]. Recientes avances políticos buscan hacer frente a estas brechas, incluido un acuerdo de la Comunidad Andina en enero de 2024 para mejorar la coordinación y construir estrategias de seguridad conjuntas[192]. Los países de la región deberían utilizar otras plataformas, como la OEA, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para promover esfuerzos de coordinación similares. La cooperación en América Latina debe apuntar, en primer lugar y, sobre todo, a preparar a los Estados vulnerables para los efectos colaterales de las mutaciones en el mercado del narcotráfico. Lo ideal sería que esta coordinación ayudara a propagar las estrategias de reducción de la violencia que resulten prometedoras. Esto será particularmente importante ahora que los recortes a la asistencia exterior de EE. UU. limitan los presupuestos para programas de resiliencia juvenil y comunitarios de manera generalizada[193].

4. Prevenir la colusión

A pesar de la corrupción generalizada, la mayoría de los Estados latinoamericanos tienen sistemas débiles o inexistentes para detectar y enfrentar la penetración criminal en las fuerzas de seguridad y el poder judicial. Los gobiernos latinoamericanos necesitan crear órganos creíbles de contrainteligencia y control interno que sean independientes de las jerarquías de las fuerzas de seguridad y puedan detectar y llevar ante la justicia a cualquier funcionario estatal que trabaje en función de intereses criminales. La detección e investigación deben ir de la mano de políticas que busquen evitar que se presenten complicidades criminales en primer lugar. Las condiciones de trabajo de los policías suelen ser pésimas, con salarios relativamente bajos a pesar de los enormes riesgos de seguridad y los desafíos psicológicos que enfrentan en sus labores. Unas mejoras básicas en la remuneración, que incluyan no sólo los salarios sino también oportunidades de educación, seguros y escolarización para las familias, pueden marcar la diferencia. Un proyecto de reforma policial en curso en la República Dominicana podría servir de ejemplo, al enfatizar una mejor remuneración y oportunidades educativas para los policías, así como la inclusión de más mujeres en la fuerza[194].

[191] Yvon Dandurand y Jessica Jahn, "The Future of International Cooperation Against Transnational Organised Crime", Global Initiative against Transnational Organized Crime, octubre de 2021.
[192] "Decisión N°922", Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 21 de enero de 2024.
[193] La suspensión de la ayuda externa declarada por el gobierno de EE. UU. también ha tenido un impacto directo en los esfuerzos antinarcóticos locales, como el desfinanciamiento de unidades de inteligencia de la policía en Colombia y la paralización de proyectos contra el fentanilo en México. Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, febrero de 2025. Ver también "Trump's foreign aid freeze stops anti-fentanyl work in Mexico", Reuters, 13 de febrero de 2025.
[194] "Plan Estratégico para la Reforma Educativa de la Policía Nacional", Presidencia de la República Dominicana, 2024; "Tasa de homicidios registra reducción histórica de 9.58 por cada 100,000 habitantes en 2024", Presidencia de la República Dominicana, 2 de diciembre de 2024.

5. Reforma penitenciaria

Muchas cárceles en la región funcionan como centros de operaciones de grupos ilegales y focos de violencia extrema[195]. La seguridad dentro y fuera de las prisiones depende de la capacidad de los Estados para retomar el control de sus sistemas penitenciarios[196]. Al mismo tiempo, ejemplos recientes de construcción de prisiones en la región, encabezados de manera visible por El Salvador, se han enfocado en alojar a grandes cantidades de prisioneros en condiciones altamente militarizadas[197].

Reformar las prisiones latinoamericanas dependerá de una mejor gestión del personal penitenciario, un control más estricto de los reclusos y mejores oportunidades de formación y educación para quienes están tras las rejas. Una supervisión más estricta de los guardias penitenciarios ayudaría a identificar a los funcionarios corruptos y, al mismo tiempo, ofrecerles ayuda para resistirse a la colusión, incluida una mejor compensación y protección para ellos y sus familias fuera de los muros de la prisión. La infraestructura dentro de las prisiones también es importante[198]. Así mismo, las autoridades deben regular de manera más efectiva lo que entra y sale de las cárceles. Quizá el control más importante sea poner fin al acceso a teléfonos celulares, enrutadores de Internet y otras formas de comunicación que les permiten a los delincuentes seguir trabajando desde la prisión. Esta estrategia parece haber dado sus primeros resultados en Rosario, Argentina, y podría replicarse en otros lugares[199]. Por último, las cárceles deben brindar a los reclusos oportunidades para cambiar sus vidas ofreciéndoles educación, incentivos por buen comportamiento y atención psicológica[200].

B. *Medios de subsistencia alternativos*

Los grupos criminales se valen de una gran cantidad de jóvenes para llenar sus filas, ofreciéndoles las oportunidades económicas de las que carecen en el mercado laboral formal. Dado que el acceso al poder, prestigio y bienes materiales son los principales atractivos para la vida ilícita, es vital que los Estados trabajen para ofrecer alterna-

[195] Entrevistas con exreclusos en Colombia sugieren que hay una cantidad significativa de aprendizajes criminales que surgen de las interacciones con miembros de otros grupos armados y criminales dentro de las prisiones. Entrevistas de Crisis Group, Neiva y Bogotá, 2022 y 2024.
[196] En un caso emblemático, sicarios asesinaron al director de la cárcel La Modelo de Bogotá a plena luz del día, con un sólo tiro, en un lugar céntrico. "Asesinan en Bogotá a Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo, en plena emergencia penitenciaria en Colombia", BBC, 17 de mayo de 2024.
[197] "Dentro del 'Alcatraz' de Bukele: 'Es imposible escapar. Estos psicópatas van a pasar la vida entera entre estas rejas'", *El País,* 7 de febrero de 2024.
[198] Exreclusos en Ecuador, por ejemplo, dijeron que las pandillas pudieron obtener un mayor control de las cárceles después de desactivar las cámaras de seguridad. Entrevistas de Crisis Group, Guayaquil, mayo de 2024.
[199] "Traslados de madrugada y celulares prohibidos: así controlan a los narcos presos que aterrorizaron Rosario", *La Nación,* 3 de octubre de 2024.
[200] Un análisis reciente de estudios académicos sobre educación en prisiones estadounidenses encontró que dichos programas reducen significativamente la reincidencia. Ver Ben Stickle y Steven Schuster, "Are Schools in Prison Worth It? The Effects and Economic Returns of Prison Education", *American Journal of Criminal Justice,* 24 de enero de 2023.

tivas, como Crisis Group ha sostenido durante mucho tiempo[201]. Los aliados internacionales pueden contribuir con su experiencia y, sobre todo, con financiación, ya que las limitaciones fiscales de los gobiernos regionales les impiden ampliar el gasto social a corto plazo[202].

En los últimos años, varios experimentos con medios de subsistencia alternativos han demostrado ser prometedores. Tras el acuerdo de paz de Colombia de 2016, a los cultivadores de coca se les ofreció la posibilidad de sustituir sus cultivos y hubo tal interés que el gobierno tuvo que limitar las inscripciones[203]. Ecuador ofreció capacitación y proyectos de subsistencia a los entonces poderosos Latin Kings como parte de un proceso de desmovilización negociado con esa pandilla que comenzó en 2002. En ambos casos, los participantes en esos programas dijeron que al principio funcionaron; aquellos reclutados por la economía ilícita estaban dispuestos y a menudo ansiosos por regresar a las actividades lícitas. Sin embargo, ambos programas tuvieron dificultades en el seguimiento de las actividades y muchos participantes volvieron a delinquir[204].

El desafío de ofrecer oportunidades económicas genuinas a los miembros de pandillas y grupos criminales es abrumador. Los barrios vulnerables a menudo no atraen inversiones privadas y ofrecen entornos comerciales inhóspitos. Prácticas como la extorsión dificultan mucho la apertura de pequeños negocios[205]. Sin embargo, existen caminos creativos para avanzar. Los procesos de diálogo en Buenaventura, por ejemplo, han intentado involucrar a las grandes empresas locales en la creación de empleo, incluyendo esfuerzos para alentar a los puertos a contratar a trabajadores locales. En términos más generales, el gobierno colombiano está experimentando con un programa que pagaría un pequeño salario a los jóvenes que abandonen los grupos armados si se mantienen alejados de la delincuencia[206]. En Monterrey, la sociedad civil local gestionó el apoyo de universidades locales para capacitar a expandilleros con el fin de prepararlos para la economía formal[207]. Aunque su implementación es lenta y difícil, estas iniciativas son esenciales para garantizar que los grupos criminales no sean los únicos empleadores en la ciudad.

C. *Reducir el flujo de armas*

Las comunidades denuncian habitualmente que la afluencia de armas a manos de grupos ilegales ha sido un catalizador del aumento de la violencia, mientras que las fuerzas de seguridad se quejan de que sus adversarios criminales tienen acceso a más y mejores armas[208]. Se utilizan docenas de rutas para transportar sofisticadas armas

[201] Informe de Crisis Group, *La droga en América Latina I: Perdiendo la lucha*, op. cit. Cuando se le preguntó qué se necesitaba para mejorar las condiciones, un alto oficial militar en Tumaco, en la costa pacífica de Colombia, respondió: "empleo para los jóvenes". Entrevista de Crisis Group, septiembre de 2021.
[202] Arturo C. Porzecanski, "Latin America's Renewed Fiscal Challenges", *Americas Quarterly*, 15 de junio de 2024.
[203] Informe de Crisis Group, *Raíces profundas: coca, erradicación y violencia en Colombia*, op. cit.
[204] Entrevista de Crisis Group, Guayaquil, mayo de 2024.
[205] Entrevistas de Crisis Group, residentes, Buenaventura, enero de 2024.
[206] "Jóvenes En Paz", Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia, 10 de julio de 2024.
[207] Entrevistas de Crisis Group, Monterrey, enero de 2024.
[208] Entrevistas de Crisis Group, oficiales militares colombianos, enero y febrero de 2023.

a América Latina, algunas desde Brasil y Perú hacia Ecuador[209]. Sin embargo, una constante en la región es la prevalencia de armas fabricadas en EE. UU., muchas de las cuales fluyen hacia el sur a través de la frontera entre EE. UU. y México[210].

A pesar de un aparente compromiso de la administración Trump de limitar el tráfico de armas de fuego hacia México, parece poco probable que se implementen regulaciones internas más estrictas para el control de armas en EE. UU.[211]. Eso deja a las autoridades con pocas herramientas para abordar el flujo de armas, aunque se han logrado algunos avances. La Ley de Comunidades Más Seguras de 2022 aumentó las sanciones para las exportaciones ilegales desde EE. UU. y cerró algunas lagunas en el registro de vendedores de armas[212]. La administración de Joe Biden también intensificó su énfasis en la aplicación de la ley, incluida la cooperación con México para rastrear armas[213]. El Departamento de Comercio estadounidense incrementó las condiciones que deben cumplir los gobiernos latinoamericanos para recibir envíos oficiales, dado que algunas armas de las fuerzas de seguridad se han filtrado al mercado abierto[214].

Se puede y se debe hacer mucho más para detener el flujo de armas. Lo ideal sería que el Congreso estadounidense adoptara medidas legislativas para reforzar las restricciones a las licencias para vendedores y compradores de armas. Los fabricantes y distribuidores de armas también podrían enfrentar una mayor responsabilidad si sus armas se ven implicadas posteriormente en actividades delictivas. Esto podría llegar a ocurrir: México ya ha presentado demandas contra fabricantes y distribuidores de armas en EE. UU.[215]. Por otra parte, un desafío emergente para todos los países latinoamericanos es la creciente sofisticación y facilidad de la impresión 3D de armas y otros tipos de fabricación de armas caseras[216]. Éstas representan la mayor parte de las armas ilegales incautadas en Ecuador, donde se producen localmente[217]. Desarti-

[209] "Del Ejército peruano a las mafias del Ecuador: las rutas del tráfico de armamento en la frontera", *Ojo Público*, 14 de enero de 2024.
[210] Ver Ioan Grillo, "Slow the Iron River of Guns to Mexico", *The New York Times,* 20 de febrero de 2021. De las armas ilegales que fueron interceptadas al ingresar ilegalmente a Ecuador, casi la mitad provenían de EE. UU. Ver Carla Álvarez, "¿El paraíso perdido? Tráfico de armas de fuego y violencia en Ecuador", Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, junio de 2024, p. 16.
[211] "Presidenta de México: Aranceles se pausan un mes; se establecerán mesas de trabajo con el gobierno de EUA en materia de seguridad y comercio", op. cit.
[212] "S.2938 – Bipartisan Safer Communities Act", ley pública de EE. UU. N.º 117-159, 25 de junio de 2022.
[213] "FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces New Action to Implement Bipartisan Safer Communities Act, Expanding Firearm Background Checks to Fight Gun Crime", comunicado de prensa, Casa Blanca, 11 de abril de 2024.
[214] En Guatemala, los Zetas se beneficiaron del saqueo de los arsenales estatales entre 2007 y 2009. Ver "U.S. Firearms Trafficking to Guatemala and Mexico", Wilson Center, abril de 2013.
[215] "Damming the Iron River: Solutions to Stop the U.S. Gun Industry from Fueling Mexico's Violence", Everytown for Gun Safety, 21 de mayo de 2024. Las designaciones de terroristas extranjeros podrían potencialmente aumentar los costos legales para los vendedores de armas estadounidenses cuyas armas luego sean rastreadas ilegalmente hasta México.
[216] Maria Zupello "3D firearm proliferation among Latin American criminal organizations", *Militant Wire*, 16 de mayo de 2022.
[217] Carla Álvarez, "¿El paraíso perdido? Tráfico de armas de fuego y violencia en Ecuador", op. cit., p. 17.

cular los mecanismos en línea que permiten su producción requerirá un esfuerzo a nivel mundial.

D. *Dialogar con los criminales*

Una de las estrategias que ha servido en ocasiones para pacificar focos de violencia en América Latina es también una de las más controversiales. En ocasiones, las comunidades, autoridades locales, élites empresariales y los funcionarios de gobiernos nacionales han llegado a acuerdos discretos con jefes criminales para reducir la violencia. Gran parte de la controversia en torno a estos acuerdos se debe a sus efectos más amplios: aunque hay evidencia que sugiere que pueden reducir la violencia entre grupos criminales y contra civiles, también pueden llegar a afianzar a las organizaciones ilegales en las comunidades, respaldar el ascenso al poder de un sólo grupo y favorecer transacciones turbias con funcionarios estatales.

1. Diálogos comunitarios

En América Latina, varias comunidades que carecen de protección estatal y viven en una extrema situación de inseguridad no han encontrado otra opción que entablar un diálogo con los grupos criminales locales. En ocasiones, los líderes locales han logrado acercarse a los cabecillas de las pandillas o de los grupos armados para establecer límites, por ejemplo, sobre el reclutamiento de menores o la venta de drogas en las escuelas. Algunas comunidades afirman que da mejores resultados cuando docenas de personas se organizan para acercase en grupo al líder criminal local[218]. Negociar como una comunidad entera puede limitar el riesgo generado por cualquier acuerdo, ya que incluso las bandas más poderosas no pueden darse el lujo de alienar a toda la población local[219].

En un caso concreto, un barrio de la ciudad colombiana de Buenaventura negoció con varias pandillas locales para transformar una peligrosa frontera invisible entre rivales en una zona desmilitarizada tras un terrible aumento de los homicidios[220]. Los residentes instalaron puestos de control las 24 horas en cada una de las dos entradas a la zona, uno de ellos controlado por la policía y otro por la armada. Aunque la zona es pequeña, sigue estando prácticamente libre de extorsiones, tráfico de drogas y asesinatos después de más de una década.

A otras comunidades les ha resultado útil buscar un intermediario independiente, como las iglesias, para facilitar conversaciones discretas sobre la reducción de la violencia. La Iglesia Católica participa actualmente en todos los procesos de diálogo formales que se llevan a cabo en Colombia; sus buenos oficios también han ayudado a reducir la escalada de conflictos durante años en ciudades como Tumaco y en las

[218] Entrevista de Crisis Group, líderes sociales, Putumayo, febrero de 2024.
[219] Entrevistas de Crisis Group, líderes sociales, Cauca y Putumayo, 2023 y 2024.
[220] Entre 2010 y 2013, un aumento de la violencia sacudió a Buenaventura, cuando los remanentes de antiguos grupos paramilitares de derecha intentaron desplazar a las guerrillas de izquierda de la ciudad portuaria. Aproximadamente 13 000 personas fueron desplazadas en 2013 y cientos fueron desaparecidas. La ciudad se hizo conocida por sus casas de pique, donde las víctimas eran asesinadas y desmembradas. La zona que hoy está desmilitarizada albergaba anteriormente varias de estas casas.

zonas rurales de Arauca[221]. La mediación de la sociedad civil también contribuyó a la reducción de la violencia en Monterrey, México, e incluyó no sólo una intervención directa para reducir la escalada del conflicto, sino también programas de apoyo a los pandilleros que deseaban desmovilizarse[222].

En muchos casos, las iniciativas comunitarias basadas en el diálogo con grupos criminales se centran en prioridades locales alcanzables, como prevenir el reclutamiento, limitar el consumo de drogas o brindar espacios seguros a las víctimas de violencia de género. La interacción de la comunidad con una organización armada es de alto riesgo y nunca es la primera opción. Pero cuando las conversaciones son la única opción, los gobiernos podrían ayudar apoyando a los civiles que se encuentran en la primera línea de la violencia. En particular, los funcionarios podrían discretamente dejar en claro que no emprenderán acciones judiciales contra civiles que busquen entendimientos humanitarios con grupos ilegales[223].

2. Negociaciones con el Estado

Las negociaciones con grupos criminales lideradas por el Estado tienen una larga historia en América Latina y gozan de mala reputación. A menudo, han implicado que el Estado haga la vista gorda ante actividades económicas ilícitas, incluido el narcotráfico, siempre y cuando el grupo criminal en cuestión elimine ciertos tipos de violencia como homicidios, secuestros y extorsión. Como se señaló anteriormente, durante sus décadas de gobierno unipartidista, el Partido Revolucionario Institucional de México toleró la actividad delictiva (y se benefició de ella) bajo el entendimiento tácito de que los carteles debían limitar el uso flagrante de violencia en público. En Colombia, la ciudad de Medellín redujo sus índices de homicidios, que alcanzaron cifras récord, después de que las autoridades locales aparentemente llegaran a un entendimiento con el jefe criminal Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, a principios de la década de 2000[224].

Experiencias en el pasado han demostrado tanto los beneficios como los peligros de estos acercamientos. Para las comunidades en manos de poderosos grupos armados, el diálogo auspiciado por las autoridades nacionales y locales, y en el que a menudo participa la comunidad empresarial, puede traer un respiro y restablecer un mínimo de paz. Casos tan diversos como El Salvador, Ecuador, Monterrey en México y Buenaventura en Colombia han demostrado que cuando la violencia es organizada y deliberada, el diálogo puede funcionar para reducir los niveles de derramamiento de

[221] Entrevistas de Crisis Group, miembros de las conversaciones y del clero, Tumaco y Arauca, 2022 y 2023.
[222] Entrevistas de Crisis Group, Monterrey, febrero de 2023.
[223] El derecho internacional humanitario consuetudinario ofrece una serie de herramientas de política que las comunidades podrían utilizar en sus interacciones con organizaciones armadas, como la demarcación de zonas protegidas, como escuelas y hospitales, y principios en torno a la protección de grupos particulares de personas, como mujeres, niños y ancianos. Ver "Bases de datos de derecho internacional humanitario: DIH consuetudinario", Comité Internacional de la Cruz Roja, 2024.
[224] Esteban Arratia Sandoval, "Agendas criminales y procesos de paz en Colombia: el caso de la "Donbernabilidad" en Medellín", *Revista Política y Estrategia,* no. 130 (2017), pp. 57-100; Christopher Blattman, Benjamin Lessing y Santiago Tobón, "El terrible dilema para reducir la violencia organizada: El caso de Medellín", *Nada es Gratis,* 16 de mayo de 2022.

sangre[225]. Pero las desventajas son imposibles de ocultar. Al reducirse la amenaza de las fuerzas de seguridad (siempre que respeten ciertas reglas), los grupos criminales, que tienen poco interés en objetivos políticos o programáticos más amplios, han aprovechado las treguas y otros acuerdos negociados para fortalecer y expandir su alcance en la sociedad y las instituciones estatales[226].

No obstante, los Estados podrían considerar la posibilidad de mantener conversaciones a puerta cerrada como una estrategia a corto plazo para abordar los picos de violencia. La experiencia indica que esto será más eficaz si el Estado tiene en mente un objetivo específico (y también líneas rojas); si los grupos son suficientemente jerárquicos, y si hay pocos saboteadores (a menudo otros grupos armados) esperando al asecho[227]. Las conversaciones deben comenzar con una fase exploratoria, durante la cual el gobierno puede evaluar los intereses, objetivos y razones del grupo criminal para entablar un diálogo. Durante esta fase, el gobierno debe buscar gestos de buena fe del grupo criminal para establecer confianza.

Si se puede llegar a un entendimiento inicial, ambas partes deben trabajar en programas piloto de reducción de la violencia que podrían ampliarse si resultan exitosos. Por ejemplo, a cambio de que los criminales reduzcan los peores tipos de violencia, el Estado podría ofrecer una reducción en ciertos tipos de operaciones ofensivas en su contra (sin renunciar nunca a la capacidad de combatir los actos y comportamientos criminales). Tener una estrategia de salida clara es igualmente importante. Los gobiernos podrían optar por continuar las conversaciones y tratar de desmovilizar a parte o la totalidad del grupo, o reintroducir lentamente algunos tipos de medidas de seguridad. Esta vía de salida es crucial para limitar los inevitables riesgos de que el diálogo fortalezca el control y la influencia de los grupos criminales en el corto plazo. A lo largo del proceso, los acuerdos también pueden beneficiarse de la supervisión y la mediación de terceros, posiblemente de líderes locales, religiosos o étnicos, para garantizar su credibilidad y estabilidad.

E. *Control de drogas*

Incluso si se aplican todas las políticas sugeridas anteriormente, el papel de América Latina en el tráfico de drogas, la persistente desigualdad económica y la falta de instituciones sólidas significan que es probable la región que siga sufriendo por la actividad criminal que alimenta la demanda mundial de drogas. América Latina está sujeta a una cruel paradoja en la que entre más intervienen las fuerzas de seguridad, más

[225] Casi una década después del esfuerzo de reducción de la violencia liderado por la comunidad en Buenaventura, el gobierno del presidente Gustavo Petro apoyó en 2022 el diálogo con las dos principales bandas que operan en la ciudad, lo que llevó a aproximadamente tres meses sin asesinatos. "Primeros resultados de la paz en Buenaventura: cifras del delito 2021-2022", PARES, 16 de febrero de 2023.

[226] Ver, por ejemplo, Teresa Whitfield, "Mediating Criminal Violence: Lessons from the Gang Truce in El Salvador", Oslo Forum Paper, 2013; Eric Rahman y Siniša Vuković, "Sympathy for the Devil: When and How to Negotiate with Criminal Gangs – Case of El Salvador", *Studies in Conflict and Terrorism*, vol. 42, no. 11 (2018).

[227] Vanda Felbab-Brown, "Bargaining with the Devil to Avoid Hell?", Institute for Integrated Transitions, 2020.

incautaciones se hacen y una prohibición más estricta disparan el precio de las drogas y, por lo tanto, las ganancias para sus traficantes.

Aunque no existe un consenso sobre esta cuestión en la región, muchos líderes latinoamericanos han expresado su oposición a un sistema de control de drogas que ha impuesto la mayor parte de la carga de la violencia sobre su población sin haber logrado reducir el mercado ni frenar el aumento de muertes por sobredosis concentradas en los países consumidores. Los líderes regionales llevan casi dos décadas exigiendo una revisión global de las políticas sobre drogas. La Cumbre de las Américas de 2012 solicitó a la OEA la elaboración de un informe en el que se sugirieran mejores enfoques[228]. Unos años más tarde, la ONU convocó una sesión especial de la asamblea general para debatir el tema a petición de México, Colombia y Guatemala[229]. Después de dejar el poder, algunos expresidentes han denunciado con franqueza un enfoque que describen como un "desastre absoluto"[230]. Más recientemente, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México, encabezaron una conferencia regional en Colombia para replantear la guerra contra las drogas[231].

Las reformas al actual régimen de control de drogas, incluido un mercado regulado de estupefacientes, no evitarían ni aliviarían todos los daños causados por los grupos criminales, que ya han extendido sus tentáculos mucho más allá del narcotráfico. En el clima actual, una propuesta global de este tipo no encontraría muchos Estados que la respaldaran. Pero si la violencia continúa empeorando a medida que se intensifican los esfuerzos para limitar la oferta de estupefacientes, no debería sorprender que los gobiernos latinoamericanos prioricen el bienestar de sus ciudadanos por encima del manual establecido para el control de drogas[232]. En lugar de lanzar amenazas, los aliados extranjeros podrían ayudar a aligerar la carga de esta estrategia con un mayor apoyo financiero, técnico y material para la reducción de la violencia. Una estrategia que no se centre sólo en impedir los flujos de drogas, sino que también gestione las devastadoras consecuencias del narcotráfico y las campañas para detenerlo es la única fórmula que puede contar con un apoyo duradero de América Latina.

[228] "El problema de las drogas en las Américas", OEA, 2013.
[229] Lucia Sobekova, "UNGASS: A Very Modest Policy Review", comentario de Crisis Group, 2 de mayo de 2016.
[230] "Former Latin American leaders urge the world to end war on drug disaster", *The Guardian*, 11 de marzo de 2016. El expresidente colombiano Juan Manuel Santos, miembro del consejo directivo de Crisis Group, ha descrito la "guerra contra las drogas" como "pedalear en una bicicleta estática". Ver "President Juan Manuel Santos of Colombia", *The World Today*, 31 de marzo de 2021.
[231] "Petro suma a López Obrador en su reclamo por replantear la guerra contra las drogas", *El País*, 7 de septiembre de 2023. Petro ha dicho que la guerra contra las drogas ha producido "un genocidio" en América Latina. "Petro dice que la guerra contra las drogas ha producido un genocidio en América Latina", *Infobae*, 9 de septiembre de 2023.
[232] Observadores señalan que, a medida que EE. UU. y otros países legalizan el uso de marihuana y otras drogas a pesar de las restricciones de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, los países consumidores están perdiendo la autoridad moral para exigir una política latinoamericana de drogas. "Políticas de drogas: Poner fin a la fallida 'guerra contra las drogas' de EE. UU.", Washington Office for Latin America, 11 de octubre de 2024.

VI. Conclusiones

Mientras el presidente Trump intenta revigorizar una guerra contra las drogas que lleva más de 50 años, América Latina padece su fracaso. Las capturas de capos, la erradicación forzosa de cultivos y las agresivas incautaciones han generado redes de narcotráfico más fuertes, más resistentes y geográficamente más dispersas, que están produciendo sustancias ilícitas cada vez más letales para un mercado global más grande. Donde antes había cadenas de suministro verticales y carteles dominantes, ahora hay una serie de actores criminales que compiten violentamente o coluden entre sí de manera lucrativa, mientras vuelcan su poder coercitivo sobre funcionarios, periodistas, fiscales o cualquier civil que se interponga en su camino. Estos mismos grupos penetran y corrompen las instituciones de forma sistemática, erosionando a los Estados que se supone deben combatirlos.

Numerosas comunidades de América Latina se enfrentan ahora a un mundo criminal fragmentado, en el que la violencia intensa y prolongada se ha convertido en el *statu quo*. Mientras tanto, algunos países con grandes mercados de consumidores, en particular en Europa y Norteamérica, están pidiendo controles más estrictos al narcotráfico y, en el caso de EE.UU. bajo la administración Trump, una renovada ofensiva militar. Décadas de "guerra contra las drogas" proporcionan abundante evidencia de que es muy difícil hacer desaparecer a los traficantes de América Latina. Combatirlos a través de la fuerza armada genera más, y no menos, ganancias delictivas, violencia, corrupción y miseria.

América Latina tiene una amplia experiencia práctica que podría ser la base de una estrategia para reducir la violencia. El fortalecimiento de los sistemas de seguridad, sobre todo la policía, las prisiones y la investigación criminal ha demostrado su eficacia. Sin embargo, por sí solas, estas estrategias no producirán un éxito sostenido si no se abordan las razones por las cuales la producción y el tráfico de drogas sobreviven y se reproducen a pesar de los ataques policiales y militares, entre ellas la falta de oportunidades económicas y la fácil disponibilidad de armas de fuego. En los lugares donde la violencia relacionada con el narcotráfico está arraigada, también se podrían explorar negociaciones con grupos clave en condiciones muy específicas. Puede que no todas estas estrategias obtengan el respaldo de los gobiernos de fuera de la región. Pero mientras América Latina sea la fuente de una gran parte de las drogas que se consumen en el mundo y la principal víctima de la violencia relacionada con las drogas, es injusto para la región y peligroso para el mundo intensificar una guerra que está fracasando.

Bogotá/Ciudad de México/Nueva York/Bruselas,
11 de marzo de 2025

Anexo A: Mapa de México, América Central y los Andes

Anexo B: Acerca de International Crisis Group

El International Crisis Group (Crisis Group) es una organización no gubernamental independiente sin ánimo de lucro, con cerca de 120 funcionarios en cinco continentes, que combina el análisis sobre el terreno con labores de sensibilización al más alto nivel, con el objetivo de prevenir y solucionar conflictos letales.

El trabajo de Crisis Group se basa en investigaciones realizadas sobre el terreno. Cuenta con equipos de analistas políticos con sede en o cerca de los países en riesgo de crisis, escalada o recurrencia de conflictos violentos. Con base en la información y las evaluaciones sobre el terreno, produce informes analíticos con recomendaciones prácticas dirigidas a quienes toman decisiones fundamentales en el ámbito internacional. Crisis Group también publica CrisisWatch, un boletín mensual de alerta temprana, que actualiza sucintamente y con regularidad la coyuntura en más de 80 situaciones de conflicto o conflicto potencial alrededor del mundo.

Los informes de Crisis Group son ampliamente distribuidos por correo electrónico y se publican simultáneamente en su sitio web, www.crisisgroup.org. Crisis Group trabaja en estrecha colaboración con gobiernos y con grupos influyentes, incluidos los medios, para llamar la atención sobre sus análisis de crisis y buscar apoyo para sus recomendaciones en materia de políticas.

El Consejo Directivo de Crisis Group –cuyos miembros incluyen figuras prominentes en las esferas de la política, la diplomacia, los negocios y los medios de comunicación– participa de forma directa en la promoción de los informes y las recomendaciones de la organización, buscando su consideración por parte de formuladores de políticas en el mundo. Crisis Group es codirigido por Frank Giustra, presidente y director ejecutivo de Fiore Group y fundador de Radcliffe Foundation, y por Susana Malcorra, exministra de Relaciones Exteriores de Argentina y jefe de gabinete del secretario general de las Naciones Unidas.

En diciembre de 2021, Comfort Ero fue designada como presidente y directora ejecutiva de Crisis Group. Ero se incorporó a Crisis Group en 2001 como directora del proyecto para África occidental y posteriormente ascendió a directora del programa para África y vicepresidenta interina. Entre sus dos periodos en Crisis Group, trabajó en el Centro Internacional para la Justicia Transicional y el representante especial del secretario general para la Misión de la ONU en Liberia.

La sede internacional de Crisis Group se encuentra en Bruselas, y la organización cuenta con oficinas en siete localidades: Bogotá, Dakar, Estambul, Nairobi, Londres, Nueva York y Washington, DC. También tiene representación de personal en las siguientes ciudades: Abuja, Adís Abeba, Bahréin, Bakú, Bangkok, Beirut, Caracas, Ciudad de Gaza, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, Jerusalén, Johannesburgo, Juba, Kabul, Kiev, Manila, Moscú, Seúl, Rangún, Tiflis, Toronto, Trípoli y Túnez.

Crisis Group recibe apoyo financiero de una amplia gama de gobiernos, fundaciones y fuentes privadas. En la actualidad Crisis Group tiene relaciones con los siguientes departamentos y organismos gubernamentales: Australia (Departamento para los Asuntos Internacionales y el Comercio), Austria (Agencia para el Desarrollo), Banco Mundial, Canadá (Ministerio de Asuntos Exteriores), Catar (Ministerio de Relaciones Exteriores), Dinamarca (Ministerio de Asuntos Exteriores), Eslovenia (Ministerio de Relaciones Exteriores), Finlandia (Ministerio de Relaciones Exteriores), Francia (Ministerio para Europa y las Relaciones Exteriores, Agencia para el Desarrollo), Fondo para el Análisis de Riesgos Complejos (CRAF'd), Irlanda (Departamento de Relaciones Exteriores), Japón (Agencia de Cooperación Internacional y Organización de Comercio Exterior), Luxemburgo (Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos), Noruega (Ministerio de Relaciones Exteriores), Nueva Zelanda (Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio), Países Bajos (Ministerio de Relaciones Exteriores), Principado de Liechtenstein (Ministerio de Relaciones Exteriores), Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), Reino Unido (Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo), Suecia (Ministerio de Relaciones Exteriores), Suiza (Ministerio Federal de Relaciones Exteriores) y Unión Europea (Instrumento para la Estabilidad y la Paz y DG INTPA).

Crisis Group mantiene relaciones con las siguientes fundaciones: Carnegie Corporation of New York, Friedrich Ebert Stiftung, Global Challenges Foundation, Henry Luce Foundation, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, National Endowment for Democracy, Open Society Foundations, Ploughshares Fund, Pivotal Foundation, The David and Lucile Packard Foundation, Robert Bosch Stiftung, Rockefeller Brothers Fund, Stand Together Trust, Stiftung Mercator y Wellspring Philanthropic Fund.

Marzo de 2025

Anexo C: Informes e informes breves de Crisis Group sobre América Latina y el Caribe desde 2022

Informes e informes breves especiales

7 Priorities for the G7: Managing the Global Fallout of Russia's War on Ukraine, Informe breve especial N°7, 22 de junio de 2022.

Ten Challenges for the UN in 2022-2023, Special, Informe breve especial N°8, 14 de septiembre de 2022.

Seven Priorities for Preserving the OSCE in a Time of War, Informe breve especial N°9, 29 de noviembre de 2022.

Seven Priorities for the G7 in 2023, Informe breve especial N°10, 15 de mayo de 2023.

Ten Challenges for the UN in 2023-2024, Informe breve especial N°11, 14 de septiembre de 2023.

Ten Challenges for the UN in 2024-2025, Special Briefing N°12, 10 de septiembre de 2024.

Cómo superar la fractura global sobre Venezuela, Informe sobre América Latina N°93*, 17 de febrero de 2022*

Cómo enfrentar un problema combustible: huachicoleo y violencia en México, Informe breve sobre América Latina N°46*, 25 de marzo de 2022*

Fervientes devotos en Brasil: Bolsonaro y los riesgos de un año de elecciones, Informe breve sobre América Latina N°47, 16 de junio de 2022

Tiempos difíciles en el refugio: cómo proteger a los migrantes venezolanos en Colombia, Informe de sobre América Latina N°94, 9 de agosto de 2022

Atrapados por el conflicto: cómo reformar la estrategia militar para salvar vidas en Colombia, Informe sobre América Latina N°95, 27 de septiembre de 2022

Un remedio para la fiebre carcelaria en El Salvador, Informe sobre América Latina N°96, 5 de octubre de 2022

¿Lazos incondicionales? Restaurar las relaciones entre Venezuela y Colombia, Informe sobre América Latina N°97, 1 de diciembre de 2022

El último recurso de Haití: las pandillas y la perspectiva de una intervención extranjera, Informe breve sobre América Latina y el Caribe N°48, 14 de diciembre de 2022

Proteger a los colombianos más vulnerables en el camino hacia la "paz total, Informe sobre América Latina N°98, 24 de febrero de 2023

México y sus alcaldes olvidados: gobierno local y la lucha contra el crimen, Informe sobre América Latina N°99, 23 de junio de 2023

¿Nuevo amanecer o viejos hábitos? Resolver los dilemas de seguridad de Honduras, Informe sobre América Latina N°100, 10 de julio de 2023

Navegar la estancada política de Venezuela: el camino hacia las elecciones, Informe sobre América Latina N°101, 16 de agosto de 2023

El cuello de botella de las Américas: crimen y migración en el tapón del Darién, Informe sobre América Latina N°102, 3 de noviembre de 2023

Socias en el crimen: el ascenso de las mujeres en los grupos ilegales mexicanos, Informe sobre América Latina N°103, 28 de noviembre de 2023

Las pandillas de Haití: ¿Puede una misión extranjera romper su yugo?, Informe breve sobre América Latina y el Caribe N°49, 5 de enero de 2024

Miedo, mentiras y lucro: el uso de redes sociales por los grupos criminales en México, Informe breve sobre América Latina N°50, 31 de enero de 2024

Conflictividad perpetua: una ruta hacia la estabilidad en el Perú, Informe sobre América Latina N°104, 8 de febrero de 2024

La incógnita de la "paz total": qué hacer con los gaitanistas, informe sobre América Latina N°105, 19 de marzo de 2024

*El laberinto de los generales: crimen y militares en México***,** informe sobre América Latina N°106, 24 de mayo de 2024

Un problema de tres fronteras: detener la criminalidad en la Amazonía, Informe breve sobre América Latina N°51, 17 de julio de 2024

Tierra arrasada: cómo frenar el control rebelde del Amazonas colombiano, Informe breve sobre América Latina N°52, 18 de octubre de 2024

Una transición bloqueada: Política y violencia en Haití, Informe sobre América Latina y el Caribe N°107, 19 de febrero de 2025

Anexo D: Consejo directivo de Crisis Group

PRESIDENTE Y DIRECTORA EJECUTIVA

Comfort Ero
Exvicepresidenta interina y directora del Programa para África de Crisis Group.

CO-PRESIDENTES DEL CONSEJO

Frank Giustra
Presidente y director ejecutivo, Fiore Financial Corporation; fundador, Radcliffe Foundation.

Susana Malcorra
Exministra de Relaciones Exteriores de Argentina.

OTROS MIEMBROS DEL CONSEJO

Fola Adeola
Fundador y presidente, FATE Foundation.

Abdulaziz Al Sager
Presidente y fundador de Gulf Research Center y president de Sager Group Holding

Hushang Ansary
Presidente, Parman Capital Group LLC; exembajador de Irán en EE. UU. y ministro de Finanzas y Asuntos Económicos.

Gérard Araud
Exembajador de Francia en EE. UU.

Zeinab Badawi
Presidente, SOAS University of London

Carl Bildt
Ex primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Suecia.

Sandra Breka
Vicepresidenta y directrora de operaciones, Open Sociaety Foundations.

Maria Livanos Cattaui
Exsecretaria General de la Cámara Internacional de Comercio.

Ahmed Charai
Presidente y director ejecutivo de Global Media Holding y editor del semanario marroquí *L'Observateur.*

Nathalie Delapalme
Directora ejecutiva y miembro de la Junta Directiva de Mo Ibrahim Foundation.

María Fernanda Espinosa
Expresidenta de la 73ª sesión de AG de la ONU

Miriam Coronel-Ferrer
Exasesora senior de mediación, ONU

Sigmar Gabriel
Exministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller de Alemania.

Fatima Gailani
Presidenta del Afghanistan Future Thought Forum y expresidenta de la Sociedad de la Media Luna Roja afgana.

Julius Gaudio
Director general de D. E. Shaw & Co., L.P.

Pekka Haavisto
Miembro del Parlamento y ex ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia

Stephen Heintz
Presidente y director ejecutivo, Rockefeller Brothers Fund

Rima Khalaf-Hunaidi
Ex subsecretaria general de la ONU y secretaria ejecutiva de UNESCWA

Mo Ibrahim
Fundador y presidente de Mo Ibrahim Foundation; fundador de Celtel International.

Mahamadou Issoufou
Expresidente de Níger

Kyung-wha Kang
Exministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea

Wadah Khanfar
Cofundador, Al Sharq Forum; exdirector general, Al Jazeera Network.

Nasser al-Kidwa
Presidente de Yasser Arafat Foundation; exmediador adjunto de la ONU sobre Siria.

Bert Koenders
Exministro de Relaciones Exteriores de Holanda y subsecretario general de Naciones Unidas.

Andrey Kortunov
Director general del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales.

Ivan Krastev
Presidente del Centro para Estrategias Liberales (Sofía); miembro fundador de la junta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Nancy Lindborg
Presidenta y directora ejecutiva de Packard Foundation

Tzipi Livni
Excanciller y vice primer ministro de Israel.

Helge Lund
Presidente de BP Plc (Reino Unido) y Novo Nordisk (Dinamarca).

Lord (Mark) Malloch-Brown
Exsecretario general adjunto de las Naciones Unidas y administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

William H. McRaven
Almirante retirado de la Marina de EE. UU., que sirvió como 9° comandante del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU.

Shivshankar Menon
Exsecretario de Exteriores de India; exasesor de Seguridad. Nacional

Naz Modirzadeh
Director del programa de Derecho Internacional y Conflicto Armado de la Escuela de Derecho de Harvard.

Saad Mohseni
Presidente y director ejecutivo de MOBY Group.

Nadia Murad
Presidenta and presidenta del consejo de Nadia's Initiative

Ayo Obe
Presidente de la junta de Gorée Institute (Senegal); abogada (Nigeria).

Meghan O'Sullivan
Ex vice asesora de Seguridad Nacional de EE. UU. sobre Irak y Afganistán.

Kerry Propper
Socio director de Partner of ATW Partners; fundador y presidente del consejo de Chardan Capital.

Ahmed Rashid
Escritor y periodista de política exterior, Pakistán.

Nirupama Rao
Exsecretario de Asuntos Exteriores de la India y exembajador de la India en China y Estados Unidos

Juan Manuel Santos Calderón
Expresidente de Colombia, premio Nobel de Paz 2016.

Ine Eriksen Søreide
Exministro de Relaciones Exteriores, exministro de Defensa de Noruega, y presidente del Comité de Relaciones Exteriores y Defensa

Alexander Soros
Vicepresidente de la Junta Global, Open Society Foundations.

George Soros
Fundador, Open Society Foundations y presidente, Soros Fund Management.

Darian Swig
Fundadora y presidenta, Article 3 Advisors; cofundadora y presidenta del consejo; Article3.org.

CONSEJO CORPORATIVO GLOBAL

Un distinguido círculo de promotores de Crisis Group, procedentes de altos cargos ejecutivos y empresas del sector privado.

Líderes mundiales

Aris Mining

Shearman & Sterling LLP

White & Case LLP

Socios mundiales

(2) Anónimo

APCO Worldwide Inc.

BP

Chevron

Eni

Equinor

GardaWorld

Sempra Energy

TotalEnergies

EMERITOS DE CRISIS GROUP

George Mitchell – Presidente emérito

Gareth Evans – Presidente del consejo emérito

Lord (Mark) Malloch-Brown – Fundador y presidente emérito del consejo

Thomas R. Pickering – Presidente del consejo emérito